

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

Vobis etiam merito accepta referimus, qui tam strenue religionis, et
justitiae partes tueas suscepistis....

DIARIO CATOLICO, APOSTOLICO, ROMANO.

Deumque, cuius causam agitis, rogamus ut vos in proposito con-
met.—Elio IX al director y redactores de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Madrid 12 rs. al mes.—En Provincias 17 rs. al mes, y 50 por trimestre en casa de los
comisionados, y 15 rs. al mes y 45 el trimestre en la administración.—En el extranjero: 70 rs.—En Ultramar: 90
reales trimestre.—La administración no responde de los sellos que se le remitan en carta sin certificar.

PUNTOS DE SUSCRIPCION.—Madrid: En la administración, Pelayo, 38 y 40, cuarto principal de la derecha.—Provinci-
as: En los puntos que se anuncian el último día de cada mes.—Paris: Agencia franco-española de D. C. A. Saavedra, 55
rue Taibout.—Mantila: D. Francisco Zudaire, Presbítero.—No se devuelve ningún manuscrito.

DISCURSO

pronunciado por el Sr. D. Luis de Trelles y No-
guero, el día 9 del actual, en la vista pública en
segunda instancia ante la Audiencia de Madrid
y su sala primera de la causa de rebelión for-
mada contra D. Lucio Dueñas y Caro, cura ecó-
nomo de Alcabón, y otros, según las notas ta-
quigráficas tomadas en el acto de las vistas y
revisadas por su autor.

Excmo. Sr.: En nombre de D. Lucio Dueñas,
cura ecónomo de Alcabón, tengo el honor de pe-
dir que V. E. se sirva declarar la nulidad funda-
mental de esta causa por haberse quebrantado
en su sustanciación las formas esenciales del pro-
cedimiento, atendido el art. 11 de la Constitu-
ción de 1869, y conforme a los artículos 8.º, 22,
23, 31 y 92 de la misma, con derecho por lo mis-
mo a la indemnización que procede por detención
arbitraria; y si a ello no hubiere lugar, teniendo
en cuenta el art. 4.º y el 6.º de la ley de 17 de
Abril de 1821, indebidamente puesta en obser-
vancia por el decreto de 22 de Julio último, pero
que rigió el procedimiento, declararle compren-
dido en el indulto publicado por el bando de 1.º
de Agosto de 1869 que se halla a folios 177 del
proceso, haciendo así el debido honor al nombre
de la nación que ha invocado al acogerle a dicho
indulto el alcalde del Casar de Escalona; y si to-
daya a ello no hubiere lugar por razones que no
alcanzo, todavía espero que V. E. se ha de servir
absolver libremente a mi defendido, puesto caso
que no existe ley penal acomodada, ni cuerpo de
delito con arreglo a los artículos y párrafos del
Código penal que en la acusación se citan, y mu-
cho menos en los que el juez de primera instan-
cia aplicó a la presente causa, declarando en este
caso también el derecho que por virtud de lo di-
cho asiste al tratado real para obtener la corres-
pondiente indemnización.

Mis primeras palabras, Excmo. señor, han de
ser de respeto al tribunal a quien me dirijo, por-
que presidiendo de mi idea y pensamiento po-
lítico que todo el mundo conoce, poseo el pro-
fundo convencimiento de que no es esta ocasión
y lugar oportuno para debatir sobre política,
sino para encerrarse en el círculo de hierro que
trazan las leyes a los tribunales y a los que ante
ellos contribuyen, y en cierta manera cooperan
a la administración de justicia.

Frustrada se verá por lo mismola esperanza de
quienes hayan concurrido a este acto ávidos de
emociones y en cierta manera de escándalo; por-
que peso a mis convicciones, en otro lugar y
tiempo manifestadas y nunca ocultas, he de sa-
crificar hoy el hombre político al abogado, den-
tro de mi propio corazón, y no ha de brillar el
orden a expensas del patrón, aunque pudiese
alcanzar de otro modo un triunfo efímero y a la
vanidad halagüeño, mi pobre palabra en monos-
cabo a riesgo de la preciosa vida que de algún
modo cifra su esperanza de salvación en la voz
amiga de su defensor.

Para otro lugar, para otro tiempo y ocasión
quedan las ardientes polémicas y los apasiona-
dos debates, que aquí no llegan las olas tempe-
stuosas que se estrellan contra la débil valla que
nos separa del público.

Son por el contrario, los tribunales, puerto
seguro de refugio, a que se acogen los naufragos
de aquel proceso mar bajo el amparo de la ley
que impera aquí absoluta, y cuya aplicación se-
vera pero justa, indeclinable pero estricta, da la
norma a los respetables decretos de V. E.

Cumple con tal ocasión el grato deber de con-
signar que, en medio de las tempestades que han
azotado la nave del Estado, mantuvieron siem-
pre los magistrados de esta nación sin ventura
el merecido renombre que ha sido su blason en
las edades pasadas, y que todavía hoy se man-
tiene incólume, y ha de legar V. E. acrecentado
a sus sucesores en este augusto ministerio.

Augusto he dicho, porque sobre quien admi-
nistra justicia se refleja de algún modo la majes-
tad suprema del juez que juzga las justicias, y
hay algo de divino en la escelsa atribución de
aplicar libremente con sujeción solo a la propia
conciencia y a Dios, las leyes y los principios
eternos de que derivan, y que en ellas se han
encarnado, por decirlo así.

No vengo, pues, ya lo he dicho, a promover
tempestades estériles para el árduo problema que
la sala va a resolver, como quiera que ante la
cuestión de vida o muerte que aquí se versa, co-
mo que desaparecen, por lo que se disminuyen
en importancia, las diferencias de idea política,
las nociones diversas que se disputan respecti-
vamente el dominio de las sociedades humanas
en nombre de la pública felicidad que todos in-
vocan, y que pocos han conseguido labrar.

La vida o la muerte de D. Lucio Dueñas: ter-
rible alternativa.... Discútese si ha de cortar
la mano de la ley el hilo de la vida de un hombre
a quien la Providencia divina no ha fijado to-
davía su término.

Dícase si el tremendo derecho, sumo derecho,
el ápice del derecho que no todos reconocen en el
Supremo imperante, ha de tener aplicación al
desdichado sacerdote a quien tengo la honra de
defender, y si este triste problema se resuelve en
contra de mi defendido, su continuación sobre la
tierra ya solo dependerá del derecho de gracia.

Ha pensado el representante del ministerio
público, cuya templanza en las formas reconozco
en la gravedad de su conclusión? Yo creo que
sí, porque no cabe en mi corazón ni en mi men-
te la idea de que haya un funcionario, que reco-
nozco digno e ilustrado, que para pedir la pena
de muerte no traiga un convencimiento serio y
profundo de que esa pena terrible es procedente
y justa.

Hay riesgo de error, eso sí, que a error está
expuesta la humana naturaleza. Y es a veces
tan sutil, y se alberga tan cautelosamente el er-
ror en los pliegues de la conciencia del hombre,
que no se da a sí mismo cuenta de él, y toma
por verdad averiguada y por dogmático y cierto
lo que es erróneo y falso; mayormente cuando se
trata de verdades del orden moral o de aplica-
ción de estas verdades a determinados casos y
circunstancias.

No me mueve a hablar así ninguna preocupa-
ción que el ministerio fiscal produzca en mi ál-
mo, y mucho menos quien hoy lleva su voz. Por-
que pasaron, ya lo sé, los tiempos en que se creía
que el deber del abogado de la sociedad consis-
tía en llevar el ejercicio de su cargo a un extre-
mo de severidad vecino de la *Dios Tómis*, da-
bia pedir siempre hecatombes en esto su templo.
Y pasaron también, para mí al menos, las pre-
ocupaciones que producían las tintas sombrías
con que se retrataba a aquel funcionario, puesto
que creo que tiene fundado derecho a ser consi-

derado y estimado quien defiende a todos, tanto
a lo menos, como quien defiende a un reo.

Dejando, pues, a un lado toda prevención, im-
porta dar a cada uno lo que es suyo, y sin me-
noscabo de los debidos miramientos, someter al
criterio legal y racional de V. E. el valor de los
razonamientos del abogado de la ley para fun-
dar la terrible conclusión que tengo el noble en-
cargó de combatir.

Y me duele decirlo: no he hallado fundamento
bastante para tamaña acusación, ni en lo que
ha escrito ni en lo que ha dicho el ministerio
fiscal.

Llamó a mi defendido obsecado al principio de
su discurso, y ciertamente que la obsecación, si
no exime de responsabilidad penal, produce, a lo
menos, atenuación que debe tenerse en cuenta,
conforme al número VII del art. 9.º del Código
penal, y no lo juzgó como obsecado, no, cuando
de aplicar la pena se trataba, ni siquiera para
acordarse del párrafo III del art. 2.º del Código
penal, como lo hizo el propio ministerio público
respecto a Mónico San Pedro y sus consortes.

Acontece, Excmo. señor, por una especie de
espigmo que se opera en el humano entendimien-
to, que cuando una convicción es muy pro-
funda y muy arraigada, no comprende el hombre,
por prudente que sea y por humilde que se reco-
noza, cómo pueda abrigarse en la cabeza de otro
una idea contraria a la suya. Y esto me acontece
a mí en orden a esta causa y a este proceso, que
yo lo creo sincero y lealmente digno de absolu-
ción libre con todas las consecuencias que en la
pretensión he detallado, y que en esta trabajo,
gran trabajo, hacer violencia a aquel convencimien-
to y comprender que haya otro que le es
abiertamente opuesto.

Y cuenta, señor, que entre los dos términos
hay un abismo, como entre la afirmación y la
negación, y no es posible conciliar tan opues-
tos extremos como la absolución y la pena capi-
tal.

Luego uno de los dos está equivocado, gra-
vemente equivocado. El tribunal resolverá, y
mientras este momento llega, a mí me toca ex-
poner los fundamentos de mi creencia, que no
son por ventura los de mi modo de pensar en po-
lítica, ni aún los del método o escuela filosófica
a que, sin quererlo, se refieren siempre las ideas
de cada uno, sino que me fundo, para formar mi
juicio, en la Constitución de 1869 cabalmente,
y en sus necesarias afinidades y relaciones con
las leyes todas que a la sazón y época de su
promulgación regían en la esfera política y en
la civil, en la personal y en la de familia, en el
modo de ser, en fin, de la sociedad española.

Dando de mano a profundas y arraigadas con-
vicciones, venciendo cuanto sea posible una
instintiva repugnancia, he de engolfarme para
defender esta causa en el estudio detenido y
en la meditación reposada, ¿de qué cree el tri-
bunal? de la democrática Constitución de 1869.

Yo pienso y siento sobre ella lo que pienso y
siento, y todo el mundo sabe, y no quiero aquí
decir: pero para defender de la acusación capi-
tal a D. Lucio Dueñas y Caro, he de engol-
farme, lo repito, en ese estudio que me imponía
el deber.

Y hallé por fruto de mi trabajo que padece
error quien crea, como aquí nos dijo que creía el
ministerio fiscal, que para la aplicación de las
leyes penales no es pertinente el texto de la
Constitución, o a lo menos no es necesario, sino
que basta el Código penal.

Es error notorio, señor excelentísimo, ó signi-
fica haber profundizado poco en la trama, por
decirlo así, en la economía de la obra de las Cortes
Constituyentes.

Porque en esa obra se halla una entidad nue-
va, a la que se subordinan todas las antiguas y
más venerables tradiciones: la Religión, los atri-
butos de la soberanía, la subordinación de las
autoridades inferiores regidas hasta hoy por la
obediencia debida, y todo en fin lo que constitu-
ye la base, por decirlo así, del derecho público
y del derecho privado, del derecho político, y del
derecho civil, y del derecho penal, y en fin, to-
das las relaciones de derecho, incluso el mismo
derecho constituyente, se ven sometidos en esa
ley fundamental a aquel nuevo ser gigante de
que hablaba poco há, que ha tomado cuerpo, y
que, como las Deidades de la India, reclama
implacablemente culto de todos los hombres
que han nacido y que residen en España, y ha-
ce víctimas que le son sacrificadas de todos los
derechos, subordinándose todo a esa nueva en-
tidad.

Claro es que hablo de los derechos individua-
les, que yo no veo en manera alguna limitados,
como a primera vista parecen estarlo, a los 31
artículos primeros de la dicha Constitución, si-
no que abrazan los 112, y aun alcanzan al art. 1.º
adicional.

Así es que cuando en la Constitución se escri-
be una prerrogativa, por ejemplo, el poder judi-
cial, allí se encuentra latente una garantía de
uno ó de varios derechos individuales, que vien-
do implícitos ó sobreentendidos en aquella con-
cesión, y no es otra cosa la prerrogativa que
un nuevo sello que se pone al derecho indi-
vidual.

Y esto es verdad hasta tal extremo, que no
hay obediencia debida ni mandato de superior
que exima de responsabilidad en los casos de una
fracción manifestada, clara y terminante de una
prescripción constitucional (art. 30, párrafo II),
y no se puede establecer ni por las leyes ni por
las autoridades disposición alguna preventiva
que se refiera a los derechos definidos en el tí-
tulo I (art. 22) y ciertas y determinadas garantías
del art. 11, no pueden suspenderse, ni aun por
una ley, aunque lo exija la seguridad del Estado
en circunstancias extraordinarias (párrafos I y
III del art. 31); y ni aun en caso de guerra y
cuando las naciones confieren a sus hombres de
armas, obedeciendo a la imperiosa ley de la ne-
cesidad, facultades extraordinarias e ilimitadas,
podrán los dichos jefes establecer ó determinar
otra penalidad que la prescrita previamente por
la ley (párrafo IV del artículo 31).

De todo lo cual se deduce que el art. 11 de la
Constitución ha creado una gran novedad que
por nada, que por nada, que en ningún caso por
extraordinario que él sea, pueda ser alterado; y
conviene a mi propósito añadir que la gran no-
vedad a que aludo lo abraza todo, como dicen los
jurisconsultos, el derecho que pudieramos llamar
sustantivo y el adjetivo, ó más claro, la compe-
tencia de los tribunales y la forma de sus proce-
dimientos, pues se lee en el art. 11, que ningún
español podrá ser procesado ni sentenciado sino
por el juez ó tribunal a quien en virtud de leyes
anteriores al delito, compete el conocimiento y

en la forma, entendiéndose bien, que estas prescrip-
ciones de aquí por lógica inducción que el

decreto de 22 de Julio de 1869, que restablece y
modifica la forma de proceder en las causas de
rebelión, introduciendo alteraciones esenciales
en la misma ley de 17 de Abril de 1821, como
quiera que dicho decreto aparezca acordado en
Consejo de ministros y rubricado por el de la
Gobernación, es uno de aquellos reglamentos
que alude el artículo 92 de la misma Constitu-
ción, que los tribunales no pueden aplicar sino
en cuanto están conformes con las leyes, y co-
mo quiera que sea dicho reglamento ó decreto so-
bre restablecer y modificar la forma de proceder
y aun la competencia de los tribunales en los
delitos de rebelión, sustituye al poder legislativo
al ejecutivo, violando así el artículo 34 de la
repetida Constitución que otorga no puede cumplirse.

Y no cabe por consecuencia de todo ello sos-
tener la validez del presente proceso, y su nulidad
radical evidente y notoria es corolario del
artículo 11 tantas veces citado.

Pero arguye el señor ministro fiscal que no se
restableció por el decreto de 22 de Julio la ob-
servancia de la ley de 17 de Abril de 1821, sino
que habiendo estado vigente esta ley hasta 17
de Mayo de 1867, desde 30 de Agosto de 1833,
y habiendo sido luego abolida por la revolución la
dicha ley de 1867, vino a quedar vigente otra
vez la ley de 17 de Abril.

Al argüir de este modo, plagiando ó copiando
la idea del considerando 6.º de la exposición que pre-
cede al decreto de 22 de Julio, se olvida por ventu-
ra su señoría de que aquí, en el terreno de los
tribunales, no tiene oportunidad tan aventurada
doctrina, porque aunque se reconozca abolida la
ley de 17 de Mayo por la revolución que essen-
cialmente se dirigió contra aquella, no así se
comprende la resurrección implícita y callada
de la dicha ley de 17 de Abril por el ministerio
de la dicha dicha revolución. Mayormente cuando
el artículo 31 de la Constitución en su párrafo
2.º, reclama para la suspensión de garan-
tías, además de la ley que así lo ordene, que de
antemano se establezca una ley de orden públi-
co, ad hoc, que seguramente no debía ser la de
1821 si estuviese restablecida, ni podía ser esta-
blecida de antemano como lo requiere el citado
artículo si ya estuviese vigente.

Con lo cual se demuestra que el legislador di-
jo de una manera terminante y expresa que no
había tal ley de 1821 en vigor cuando la Consti-
tución se formulaba, y que por el contrario, era
inexcusable para el ejercicio de la ley de suspen-
ción de garantías establecer de antemano una
ley de orden público.

Hay más: por lo que se refiere a la ley de 17
de Abril de 1821 y a la perturbación que en el
terreno del derecho ha ocasionado su intempe-
stiva aparición en la escena pública, y lo que hay
es que la ley de 1821 es tan inarmónica con la
Constitución, que resultan violados en su letra
los artículos 2.º, 5.º y 6.º, y los tres primeros
párrafos del 17 de la dicha Constitución, con más
el artículo 11, el 22, 23 y el 31, aunque ninguno
de estos últimos puede suspenderse ni por una
ley. De forma, que quedarían por ella hollados
todos los derechos individuales, así los legisla-
dos, por estar contenidos en el artículo 31, co-
mo los ilegales, a donde no llega ni el poder
constituyente ni ninguna poder humano, según
el Código ó ley fundamental.

Es, pues, flagrante la violación que de mu-
chos artículos constitucionales hizo el ya famoso
decreto de 22 de Julio de 1869.

Y es tal la evidencia de este hecho, y de tanto
alcance, que ni el voto de indemnización que las
mismas Cortes otorgasen al Gobierno serviría
para otra cosa que para librarse de la responsabi-
lidad, mas no para que se entendiera por los tri-
bunales que esta constitución restablece: restable-
cida la ley de Abril, y así lo han sentido y pen-
sado los primeros juristas consultos de España, no
losables por ventura de parcialidad respecto a
los carlistas. En su para mi respetable dictamen,
pueda decirse que he bebido la doctrina que acabo
de exponer. Y digo para mi respetable, por-
que si bien debe servir para todos la opinión im-
parcial y autorizada de tan ilustres juristas con-
sultos, para el tribunal reconozco que no puede
aceptarse como autoridad ni obedecerse como
doctrina que embarazar ó estorbar pueda su li-
berrima función de administrar justicia.

Cito aquel famoso dictamen como ampliación
de mi defensa; quiero fingir por un instante que
están sentados a mi lado, apoyando mi pobre
voto quienes tan alto han sabido colocar la au-
toridad del suyo, siquiera ellos y yo veamos más
alta y en esfera diversa acatemos, la verdad le-
gal que deriva de los tribunales, y que yo me
complace en respetar.

¿Qué consecuencia se deriva de las antedichas
consideraciones?

Que el procedimiento es nulo en su origen,
y en todos y cada uno de sus trámites; y que el
tribunal a quien me dirijo debe en rigorosa jus-
ticia, no solo anularlo, sino otorgar a mi defendido
el derecho que le concede el art. 8.º de la
Constitución, en su párrafo 2.º.

La nulidad que de tan alto origen emana, no
había menester de que fuera por nadie pedida,
para que sea por V. E. reconocida, porque su
justificación no puede prescindir de lo que dis-
ponen las leyes, y es ley la Constitución del
Estado, y ley que se manda guardar y cumplir,
y hacer guardar y cumplir a los tribunales en la de
7 de Junio de 1869.

A esa ley constitucional, a los derechos indi-
viduales que la misma ley otorga, se subordina
todo en la economía constitucional novísima, tri-
bunales y autoridades, rey y súbditos, poderes
y pueblos. Todo, hasta la misma futura libertad
del poder constituyente que no podrá legislar so-
bre la suspensión de garantías, excepción hecha
de las que permite suspender el art. 31 de la di-
cha Constitución. Este es el absolutismo consti-
tucional.

Así tenemos un nuevo dogma y una nueva ex-
cepción en las facultades ó atributos de la sobe-
ranía.

Ya no se puede decir, como los revolucionarios
franceses de fines del siglo pasado: «Todo lo pue-
den hacer las Cámaras, menos hacer de un hom-
bre una mujer»; pues hoy que ampliar la frase
reconociendo que todo lo pueden hacer, menos
tocar a los derechos individuales, ídolo de la
nueva religión política que se nos ha impuesto.

Yo no sé, ó mejor no quiero aquí saber y decir,
si esto es bueno y oportuno; yo no digo lo que
piensa el hombre sobre la ley, porque aquí no
puedo menos de acatarla, y en virtud de ella si-
no se quiere perturbar el organismo que estable-
ce, atendido solamente al art. 11 y al art. 8.º, es

indispensable, administrando justicia, declarar
la nulidad originaria del procedimiento y de to-
dos y cada uno de sus trámites con la indemni-
zación y reserva que establece el art. 8.º de la
tantas veces citada Constitución.

Si así no se hace, y por otra parte no se des-
truyen los razonamientos que quedan expuestos,
el vencido será el vencedor, y la injusticia de la
pena clamará al cielo contra los derechos que se
establecen y no se respetan, contra las promesas
que se hacen y no se cumplen.

De todos modos triunfará la justicia y la ino-
cencia, por la solución que merece y obtiene, ó
por la vejación que se sufre y que se vuelve con-
tra su autor.

Lo dicho basta para acreditar el primer extre-
mo de mi pretensión.

Aquí debía terminar mi informe, porque tengo
la segura convicción de no haber hecho violen-
cia alguna a las reglas del razonamiento, y de
haber procedido a sacar las consecuencias y apli-
caciones de verdades, que si no lo son absolutas
ni mucho menos, lo son relativamente a la nue-
va situación creada por la revolución de Setiem-
bre en el terreno jurídico.

Pero fuerza es que, obediendo al gratísimo
deber en que me hallo, trate las otras dos cues-
tiones que son referentes al segundo y tercer ex-
tremo de mi petición.

Paso, pues, a la de indulto, que naturalmente
implica y contiene otro artículo previo, por de-
cirlo así, porque si D. Lucio Dueñas se acogió al
indulto en tiempo y lugar debidos, y si le asiste
derecho a esa gracia prometida por el goberna-
dor de Toledo en su bando de 1.º de Agosto, pu-
blicado en el *Boletín extraordinario* de la misma
fecha, folio 177, no há lugar a proceder contra él
en la presente causa.

Consta que el 23 ó 29 empezó D. Lucio Dueñas
a reunir gente, y que tras el fracaso ó encuen-
tro de Iglesuela se dispersó la partida y no vol-
vió a reunirse.

El bando dice literalmente, y sin excepción
alguna, que todos los rebeldes que se dispersen
serán indultados de toda pena. Pero dice el mi-
nisterio fiscal que el art. 6.º de la ley de 17 de
Abril exceptúa del indulto a los jefes de la con-
spiración, y que por lo tanto D. Lucio Dueñas no
es indultable, ni mucho menos puede aplicarse
le el artículo 182 del Código penal, que rebaja
en dos grados la pena del que se presentó, aun-
que sea jefe.

El bando no distingue, y con arreglo al ban-
do acogió al indulto el alcalde de Escalona a mi
defendido en nombre del honor nacional. ¿A qué
hemos de atenarnos, al bando, ó a la ley? Al
bando, porque la ley no se ha publicado, y
porque sólo al bando se atuvo mi defendido al
presentarse, y el alcalde del Casar de Escalona
al recibirlo y ampararlo. Si no se tiene presente
el bando resultará una desgracia, y por la lógica
fiscal el engaño cuesta la vida a mi infeliz
defendido.

¿Es esto posible? No, seguramente. Lo que no
es legal en un convenio particular, no puede
aparecer nobis, ni generoso, ni digno entre el Es-
tado y el particular, mucho más cuando lo que
en tan grave cuestión se trata de hacer, no pue-
de hacerlo el poder público ya que no sería ge-
neroso y digno de parte de un caballero.

Si D. Lucio Dueñas hubiera sabido el riesgo que
le hubiera corrido posible al riesgo que hoy
corre su vida, ¿le pasaría por la mente la idea de
presentarse? Seguro es que no; y esta conside-
ración ha de ejercer grande influencia sobre el
ánimo del tribunal.

No puede perderse de vista la posición respec-
tiva de la autoridad pública en relación con los
rebeldes que son declarados fuera de la ley y
vuelven al círculo de acción de aquella bajo el
pacto y condición que se les brinda. Ese pacto
debe ser inviolable por ambas partes, so pena de
infringir y desconocer las nociones fundamen-
tales del derecho.

Podrá ser que el gobernador de Toledo incur-
riese en responsabilidad; podrá ser que en un
supuesto no concedido le compitiese publicar el
bando en otros términos ó comprender literal-
mente el art. 6.º de la ley de Abril, pero el hecho
indudable es que su modo de obrar, al publicar
aquel bando, es imputable al Gobierno, y como
mandatario de este obró, y por su cuenta y en su
nombre.

Bajo cualquiera de estos supuestos, el alcalde
del Casar de Escalona obró conforme a lo ofreci-
do cuando acogió al indulto, en nombre de la
nación, a mi defendido, y su persona conforme a
las leyes y condiciones bajo que se sometió y
bajo que fué admitido, es sagrada y por cierta
manera inviolable, so pena de olvidar lo más sa-
grado que hay en el orden humano después de
sus relaciones con Dios, el honor, y aun más el
honor nacional.

Sube de punto la fuerza de estas considera-
ciones, cuando se observa que el art. 6.º de la
ley de 17 de Abril es parte integrante de la mis-
ma ley, y no estaba publicada ni restablecida
públicamente; y aunque se pudiese suponer tal
cosa, no lo estaba con las reformas que sufrió, ó
no ser contenida en el bando; de suerte que aun
bajo esta consideración era ley, y el art. 6.º no
era precepto para mi defendido mientras no tu-
viese de él conocimiento después de la reforma
de 22 de Julio, ó más bien después de la reno-
vación ó restablecimiento de dicha ley por el tan-
tas veces citado decreto.

Y si no existía, es claro que no puede aplicarse
el art. 6.º.

Pero suponiendo lo imposible, tampoco ese
art. 6.º permite imponer ni pedir la última pe-
na aun siendo los principales autores de la con-
spiración, porque cuando en el precepto a que
me vengo refiriendo, se habla de que, a los que
no sean autores se les indultará de toda pena,
parece que a los autores no se les indultará de
toda pena sino que se les impondrá alguna, pero
nunca la última pena, porque no hay términos
en la misma ley para interpretar así su pre-
cepto.

Toda pena tiene por adversativo alguna pena,
pero no la última pena, porque no hay punto de
comparación entre el indulto absoluto de los
simples ejecutores y la severidad que quiere
usarse con el autor.

Comprende para percibir el absurdo la rela-
ción que hay entre los artículos 163 y 170 del
Código penal, y la distancia que por otra parte
parece entre la última pena de los autores y el
indulto de toda pena de los ejecutores.

El artículo 168 impone al autor de rebelión la
pena de muerte, y el art. 170 a los marcos ejecu-
tores la cadena temporal, esto es, dos grados
menos, mientras que, según la lógica del abo-
nado de la ley, se impondría a D. Lucio Dueñas

la pena de muerte y a los ejecutores que se pre-
sentraron el indulto de toda pena.

No hay aquí repito proporción alguna entra
caso y caso; antes resulta una crueldad desusada
para uno a la par que la indemnidad absoluta
para los demás que constituyeron la conspira-
ción, pues la palabra misma exige más de uno
para verificarse.

Sobre todos estos motivos y consideraciones
descuelga la idea del honor nacional y de la re-
pugnancia instintiva que inspira la aplicación de
pena ninguna, a quien bajo la salvaguardia de
una promesa solemne, clara y terminante, que
resulta del bando, y que aplicó a la letra el al-
calde del Casar de Escalona, se presentó a la au-
toridad y se entregó así al poder público, cuyo
representante hoy pide contra él la pena capi-
tal.

Esta idea es repulsiva, se resiste no solo a la
justicia, sino a otro sentimiento íntimo del co-
razón humano, del corazón que se subleva ante
la felonía y que en este caso, si no llega a la
traición es seguramente un grave abuso de con-
fianza, ¿y de quién? Del Estado, del poder su-
premo de la nación española en quien, conforme
a la novísima Constitución, reside la soberanía
de una manera esencial (art. 32). No diré más
sobre ello.

Vencidos los dos obstáculos legales que deben
oponerse al fallo de esta causa en el fondo por
falta de procedimiento legal y por falta de su-
puesto de culpa que el indulto ha borrado, infié-
rese que ha de tener el defensor más invencible
repugnancia todavía a tratar la tercera hipóte-
sis ó extremo tercero de la solicitud inicial. Pero
es forzoso hacerlo así en una cuestión de tal im-
portancia, como quiera que baste cualquiera de
los dos puntos tratados para producir la absoluta
libertad del tratado real.

Voy por lo mismo a hacerme la doble violencia
que es indispensable para discurrir sobre el ter-
cer extremo, estudiando la ley penal y el cuerpo
del delito, su gravedad, su importancia, y su re-
lación con aquella ley penal, con la esperanza
fundada de justificar también a esta luz la triple
pretensión en su último; extremo como comen-
cemos.

Pregónanse en todos los tonos y por do quiera
las conquistas y los adelantos del derecho penal,
suponiendo que de poco acá se han hecho
grandes progresos en la aplicación del derecho de
castigar, salvándose de grandes injusticias la li-
bertad y la seguridad del hombre, entregado an-
tes al arbitrio del más fuerte, ó a la aplicación
de doctrinas contrarias a la dignidad humana y
opuestas a sus fueros imprescriptibles.

Y sin embargo, y a pesar de todas estas alha-
racas, nada más ajeno de verdad que tales afir-
maciones, pues antes que escribiesen Bentham
y el marqués de Beccaria, y Rossi, y Pacheco; an-
tes, may antes, diez y nueve siglos antes, había
conseguido San Pablo la máxima fundamental
del derecho penal que se lee en el art. 2.º del
Código penal. Y la había consignado, reconocí-
moso con asombro, para el pecado, puesto que
dice en el cap. 3.º de su epístola a los romanos,
per legem cognovit peccati, y en el cap. 4.º de la
misma, *Ubi non est lex, nec peccatum*; y en el
5.º, *Ubi ad legem peccatum erat, in mundo; pec-
catum autem non imputabatur, cum lex non esset*;
y en el cap. 7.º, *peccatum non cognovit nisi per
legem*.

tante á lo que hizo D. Lucio Dueñas y sus consortes.

Pero el Código penal dió á la voz una significación más precisa, más concreta, más extrínseca, requiriendo como he dicho la concurrencia de las cuatro indicadas circunstancias para el delito de rebelión, y la Constitución democrática en su art. 18, vino á introducir profunda y radical alteración, y á dar nueva y más estrecha acepción al delito en que me ocupo.

Y es notorio. Si el art. 18 otorga facultad ilegítima de hacer manifestaciones políticas con tal que sean celebradas de día y sin ponerles ningún otro límite ni restricción, visto es que para definir como alzamiento público contra el Gobierno una agrupación más ó menos numerosa que á fin político se encamine, es indispensable andar con pies de plomo, no sea que turbemos la dulce armonía que vino á establecer la novísima Constitución en el ejercicio libérrimo del humano albedrío.

Porque si, señor excelentísimo, hay un absolutismo moderno que se levanta imperioso en el estadió constitucional: los derechos individuales. No soy en este lugar su censor ni su panegirista: á fortiori. Pero si se nos imponen, y si por infringir el dogma liberal se inerepa y acusa á D. Lucio Dueñas, justo es, y arreglado á toda razón, que se examine el alcance de la doctrina en cuanto á su interés y defensa conviene, y que si se le ha de castigar por atentado al nuevo Dios, se prevenga á su vez de la parte que le es favorable en la novísima *religion política*, única que pueden profesar de hoy en más los dichosos habitantes de este país.

Viniendo á la aplicación de estas ideas, ¿en dónde concluye la manifestación política, derecho inalienable (artículos 15 y 31 de la Constitución), y en dónde comienza el alzamiento público, delito de lesa soberanía nacional? *Hic opus hic labor.*

Repárennos que nos hallamos entre dos delitos, uno de lesión al derecho individual, otro de lesión á la soberanía nacional, y es tan árduo el problema y tan terrible la disyuntiva, que si se califica indebidamente de *alzamiento público la manifestación política*, queda conculcado y hostiado el derecho individual ilegítimamente aun por las Cortes (artículo 22), siquiera los delitos que se cometen por dicho ejercicio sean punibles por los tribunales comunes (artículo 23). Entiéndase bien, los delitos cometidos *con ocasión*, no el ejercicio de aquellos derechos, que es, por lo visto, superior á las leyes, superior á las Cortes, superior á los tribunales y por consecuencia superior á todo el orden humano, porque lo que no puede hacer el hombre, y se vea al legislador, y se prohíba á los tribunales, no lo puede hacer, ni discutir, ni autorizar nadie.

Y bien, cuando se trata de definir dos cosas, hay que pensar en cuál de las dos es la más excelente, y como quiera que aquí haya que establecer delimitación entre el derecho individual y la ley, visto es que, en caso de duda, dada la doctrina constitucional que dejo sentada, no puede abrigarse la menor duda de que la ley cede al derecho individual, y de que el conflicto si lo hay, ha de resolverse á favor de este y á espensas de aquella por temor fundado de que lo subalterno y accesorio (la ley) no se sobreponga á lo dogmático y fundamental (el derecho individual).

Quiere esto decir que si no interpreto mal la nueva ciencia, lo cual es más que posible, dada mi propia rudeza y lo abstruso de los problemas de aquella y la poca afición que la profeso, es menester que el alzamiento público tenga este carácter *ostensible, claro y evidente* para que no haya el riesgo de ofender al Júpiter de la nueva mitología política.

(Qué doloroso no sería, que por el pequeño peligro de atender á la pública tranquilidad viniese á ser conculcado nada menos que un derecho individual, superior á las leyes escritas y á las posibles de escribirse!)

No creo ciertamente calumniar la mente del legislador que he procurado sorprender en sus preceptos constitucionales, asegurando que resolvería el conflicto como yo lo resolví aquí.

En caso de duda, sálvense los principios y caiga el cielo.

Volviendo á nuestro asunto, qué caracteres habrá de tener el alzamiento público para que no sea manifestación política?

Procurando armonizar la ley penal con la Constitución, debe hallarse la razón de diferencia en la intención y en el hecho; pero en la intención, cuidado con ello, clara y terminante, manifiesta y evidente, por ejemplo, revelada por una proclama reconocida por el autor del alzamiento.

En el presente caso no hay proclama ni menos manifestación expresa de salir al campo contra la soberanía de las Cortes Constituyentes, que es hoy la única soberanía existente.

Porque no vale tanto ciertamente como proclama el que haya dos recibos encabezados con el membrete ó epígrafe de «Ejército de Carlos VII», puesto que, gracias á Dios y á la gloriosa revolución de Setiembre, aquí puede tener hoy por hoy cada español un rey para su uso particular; Interrupción. El señor presidente impone silencio, y el orador ruega á sus amigos políticos que mantengan por su parte el orden y el respeto debido al Tribunal; y este derecho, precioso sin duda, no ha de disputarse á los carlistas, partidarios del que creen rey legítimo, como no se disputa á los montpensianos, y á los genovistas, y á todos los partidarios ó patronos de las diversas candidaturas frustradas ó frustrables.

No hay proclama, repito, y no hay por lo mismo manifestación pública ni alzamiento contra el Gobierno con tendencia á perturbar el ejercicio de su autoridad.

Que no hubo abierta hostilidad, lo dicen los medios y las circunstancias de la partida. Vainidos hombres, diez y ocho de ellos desarmados, que al primer encuentro se dispersaron en Iglesuela, no sin dejar dos víctimas innecesarias, han sido sacrificadas ilegalmente, y que no sabemos hayan cometido un solo delito, no forman un grupo hostil y mucho menos *abiertamente hostil*, que es decir que resistía haciendo fuego á las tropas del Gobierno, aun prescindiendo de otras circunstancias de que más tarde he de ocuparme.

Resulta de todo lo dicho, que no consta el alzamiento, ni mucho menos la abierta hostilidad contra el Gobierno, manifestada por el Cura de Alcabón y sus secuaces.

Nunca debe olvidarse á este propósito, que muy cerca del delito que se persigue se halla el derecho individual de manifestación, y que lo haya de ligereza en la definición del alzamiento, otro tanto hay de riesgo de conculcación y de falta de respeto al *Deus ex machina* del dogma liberal, que debe colocarse al abrigo de toda ataca, cortando, como se suele decir, por lo sano.

Por lo demás, dado que la manifestación política de D. Lucio Dueñas y consortes, sea perfectamente constitucional y no haya tenido otro objeto el llamado alzamiento que allegar personas que pensasen del mismo modo; reconocido que es el mismo derecho el de alzar hoy bandera en pro de un candidato (por el criterio constitucional vigente), aunque para los manifestantes fuese Rey legítimo, ya que la idea es libre como la opinión, y la palabra, y el escrito, y la reunión, y la asociación, y la manifestación de la idea (art. 17 de la Constitución), no se concibe que se convierta la dicha manifestación en alzamiento contra el Gobierno, cuyas prerrogativas y ejercicio de autoridad no estorba la suave explosión de la idea política que abrigaban y amaban los manifestantes allá en su interior, muy á placer por sabido de la Constitución novísima, y

por lo mismo de un modo completamente inocente, aunque se llama delito de rebelión.

Mal podía ser contra el Gobierno lo que obedecía los principios que la sirven de base, porque implica en los términos, como se dice en las escuelas, y no puede llevarse sin realizar el principio de contradicción.

Si descendamos al objeto que, según el artículo 167 es indispensable que sea uno de los ocho que él mismo enumera para constituir el delito de rebelión, buscándolo en el párrafo 2.º conforme el promotor y juez de primera instancia lo pensaron, ó en el párrafo 5.º como siente el ministerio fiscal en segunda instancia, yo me prometo demostrar brevemente que en ninguno de los dos términos se halla comprendido el hecho de la causa.

Pongámonos manos á la obra.

Dice el párrafo 2.º que pueden proponerse á los rebeldes «variar el orden legítimo de sucesión á la corona, ó impedir que se encargue del gobierno del reino á quien corresponda.» Pero ¿hay aquí, señor, lugar de aplicar semejante artículo? Conteste el buen sentido: ¿dónde está el orden legítimo de su cesión para ser variado? ¿Dónde el que ha de encargarse del gobierno del reino ó á quien corresponda este, aunque sea con arreglo á una ley constitucional? ¿Es desvario pretenderlo, y hasta es tiempo perdido el discutirlo? que no se concibe la variación de un orden superior sin el orden establecido, ni menos se comprende impedir que se sienten en el trono, cuando no hay persona que tal honra pretenda ó admita siquiera, y no diré más sobre este extremo.

En cuanto al párrafo 5.º que invoca el ministerio fiscal en esta Audiencia, dice este párrafo: «Sustraer el reino ó parte de él, ó algún cuerpo de tropas de tierra ó de mar, de la obediencia del supremo Gobierno.»

¿Cabe en cabeza humana que diez y ocho hombres desarmados y cuatro con carabinas viejas hayan pensado acometer tamaña empresa? Hay cosas que no se pueden discutir sin caer en uno de dos escollos: producir el desconcierto sobre los sostenedores de una idea política que, aunque sea carlista, es respetable según el art. 17 de la Constitución, ó calificar de absurdo el propósito fiscal, lo cual siempre lastima el amor propio y la dignidad del funcionario.

En casos tales, lo mejor es entregar confiadamente al buen criterio del tribunal la apreciación del atrevido pensamiento de sustraer un reino á la obediencia del Gobierno con cuatro soldados y un cabo, ó lo que es lo mismo, con cuatro hombres armados con carabinas y diez y ocho inermes, como consta de las declaraciones folios 88 y 135.

Convengamos en que á todas luces se trata de una manifestación política, y nada más, á despecho tal vez de los mismos manifestantes, puesto que aunque ellos confiesen el alzamiento y la intención, importa mucho recordar la doctrina de la ley 5.ª, título 13 de la tercera partida, cuya letra es que si alguno consociase delante del juzgador que había muerto algún ome que es vivo ó murió de su enfermedad, ó de su muerte, sin forida ninguna que le dieren, ó dijese que diera foridas á un ome que non era ferido nin llegado; que á consecuencia como esta non debe valer porque semeja que con yerro ó gran locura la hizo.

Y con esta ley al frente podría yo decir á los amigos si estuviesen presentes, «no habeis cometido delito,» pues el hombre que confesase haber matado está vivo, y la ferida que á la Constitución reconocisteis haber hecho la dejó incólume; y aun más: habeis ejercido un derecho constitucional que la *benedita* de 1869 os otorga en su art. 18.

Estoy segurísimo de que todos los que me escuchan dirán conmigo que el ome (la Constitución) está vivo y aun más, que late dentro del mismo acto que se supone criminoso su *gran corazón*, el derecho individual, y no ha recibido, no, tranquilícese el mundo, «ferida ninguna,» la venturosa obra de las Cortes Constituyentes.

Manifestación política, que no rebelión, hicieron mi defendido y sus consortes, y por añadidura, no hay términos hábiles de que les pudiesen ser aplicados en ninguna hipótesis los párrafos 2.º y 5.º del artículo 167.

Que los restantes no son aplicables, nos lo dice el silencio del ministerio fiscal, sin duda que receloso de que los párrafos 3.º y 4.º diesen lugar á una controversia de que hubo ejemplo en esta misma sala, interviniendo aquel funcionario no los citó esta vez.

Y cuenta, señor, que la controversia no se evita, porque la idea de rey, reina, regencia y la distribución de los poderes públicos tal como la hace la Constitución, no puede alterarse por una ley extraconstitucional como la de regencia, al menos para que pueda ser aplicable al art. 167 del Código penal.

Yo no niego que sea de observar, constitucionalmente hablando, la ley de 16 de Junio de 1869, que infringe el art. 85 de la misma Constitución que dice así: «La regencia ejercerá toda la autoridad del rey,» estableciendo que la sanción de las leyes (art. 34) y la facultad de suspender y disolver las Cortes Constituyentes (art. 42) no se conceden á la actual regencia. Esto basta para mi propósito, porque la nueva distribución no es constitucional, ni la Constitución otorgó ninguna de las prerrogativas que ejerce el regente hoy, sino la ley ya citada de 16 de Junio, todo lo cual es suficiente y conduce para no ser aplicable el art. 167.

En todo él se oculta y vive una idea, la soberanía nacional ó la majestad residenciada en la corona, y el delito de lesa majestad bajo este supuesto, á que conviene y se acomodan los ocho números de dicho artículo, y no á ninguna otra hipótesis de rebelión contra la constitución del Estado, de que habló el Presidente del Consejo de ministros, en la sesión de 3 de Octubre de 1869, y la orden del mismo de 5 de Octubre, pues en la primera dijo que la rebelión es contra la Constitución del Estado, y en la otra que el alzamiento era contra la soberanía de las Cortes Constituyentes.

Confesaré francamente que para que fuese aplicable el art. 167 se había menester un párrafo noveno que dijese: «atentar contra la soberanía nacional ó de las Cortes Constituyentes, ó de la nación,» porque las leyes penales no se entienden de caso á caso, ni se aplican por implícita suposición y subrogación de términos, y pretendiendo nos haríamos en aquel despropósito que estigmatizó San Pablo, que censura y proscribió también el art. 2.º del Código penal vigente, porque *Ubi non est lex, nec præparatio*, y se convertiría la acusación en atentado, y la sentencia vendría á crear y á castigar el delito á un mismo tiempo, lo cual subleva la conciencia y clama al cielo contra la justicia que solo del cielo pudo bajar, y que solo existe sobre la tierra, como dice un insigne orador, porque allá arriba hay un Juez supremo.

No diré más sobre este particular, porque la sobriedad en asuntos graves conviene á la dignidad de los tribunales y al decoro de la causa y del defensor mismo.

Dos palabras nada más para poner debido término á la ya dilatada, aunque trascendente defensa, y serán sobre dos extremos interesantes: primero, la antinomia de la ley de 17 de Abril de 1821 y del Código penal, que ambos quisiere aplicar el ministerio fiscal; segundo, sobre la prueba.

¿Cómo aplica el ministerio fiscal la ley de Abril y el Código? ¿Cómo concilia extremos tan contrarios? No lo comprendo, porque el art. 6.º ordena un bando, y el art. 181 del Código ordena

dos intimaciones preliminares á los rebeldes para que sea pensable su delito.

En el hecho están conformes ambas leyes; el resultado es el mismo; sin el bando ó las dos intimaciones no hay delito de rebelión, sino incoado, imperfecto, por decirlo así.

Y en verdad que no han precedido aquí ni lo uno ni lo otro antes de la acción de Iglesuela, y no hay un solo testigo, que después del día 1.º de Agosto, que después de aquella *cruenta jornada* en que fueron sacrificadas dos víctimas inocentes é inermes sin formación de causa y sin confesión; después de ese día, repito, nadie vió reunidos á los rebeldes, y en ese día no se había publicado aun el bando de 1.º de Agosto en Toledo. De suerte, que para la rebelión ó rebelión, falta la intimación preliminar. Que así como en el orden civil es necesario acusar la rebelión, para que la rebelión se declare así en la esfera criminal, es necesario que se intente la obediencia (art. 181 del Código), ó que se publique el bando (art. 6.º de la ley de Abril), para que el alzamiento se convierta en rebelión.

Por manera que pide el señor fiscal la pena de muerte contra un delito incoado, incompleto en la propia significación jurídica. ¿Será que aquel delito frustrado ó la tentativa en que el culpable no prosigue por cualquier causa ó accidente, merece igual pena para el ministerio fiscal que el delito consumado, lo cual toca en el absurdo jurídico, que siento sinceramente atribuir al ministerio público? No debo añadir más sobre ello.

Es todavía más notable, si cabe, que se haya censurado aquí gravemente al juez de primera instancia y al promotor por haber aplicado el artículo 182 á mi defendido, y cuidado que el artículo 182 es indispensable para llenar el vacío que deja el art. 6.º de la ley de 16 de Abril como voy á acreditar brevemente.

El art. 6.º dice que serán indultados de toda pena los rebeldes que obedezcan al llamamiento de la autoridad, *no siendo los principales autores de la conspiración*, y el ministerio fiscal dice: «que á estos pena de muerte es el art. 168.»

Está bien: tenemos Código para imponer pena de muerte según el art. 168, no tenemos Código para rebajar dos grados en la pena, según el artículo 182. ¿Cómo se entiende esto? Me felicitaré de verlo explicado. ¿Por qué razón suspende el abogado de la ley una parte de ella favorable al reo, utilizando la que le es perjudicial? No encuentro medio de conciliar con la buena razón modo de descuir tan ajeno á su dictamen.

Se olvidó el ministerio público de que en el art. 6.º, que solo quiere aplicar, queda un vacío que solo puede llenar el art. 182; aunque se prescinda de que no hay aquí rebelión, porque se retiraron los rebeldes, si los hubo, antes de la intimación; mejor dicho, que los rebeldes no son rebeldes, sino alzados que se anticiparon á obedecer lo que se les había de mandar después, y que á turbio correr, como se dice vulgarmente, podría ser aplicado al jefe el art. 182 y su párrafo segundo del Código penal.

A otra cosa, para concluir. Hubo un artículo de prueba en segunda instancia, ó mejor, una pretensión de complemento de una diligencia incoada en primera instancia é incompleta, á pesar de los arts. 2.º y 3.º de la ley de 11 de Setiembre de 1820 y de los artículos 36 y 91 de la nueva Constitución, que erigiendo en poder la administración de justicia, ensancha la esfera de su acción y la sobrepona á todo lo que pueda estorbar á sus funciones.

Yo creo, y humildemente lo digo, que la reserva del reglamento de la Guardia civil no estorbaba á D. Cenón Martínez declarar sobre la prisión de mi defendido, sobre todo después de que está procesado y sometido á una causa de pena capital; yo creía procedente la prueba por las consideraciones que he alegado, y si no lo creo ya, es porque V. E. ha dicho otra cosa, y cuando la ley no otorga remedio ulterior, es que me pone un sello en los labios para contradecir lo que es ejecutorio; pero en hecho de verdad y deduciendo consecuencias de lo que veo y de lo que acato, ¿cómo he de comprender lo pena capital quedando una duda grave sobre la imputabilidad del hecho, y sobre su importancia en orden á un estímulo poderoso que determina la acción? ¿Cómo me ha de pasar por la mente que pueda imponerse y pedirse la última pena, cuando queda cubierto con el velo del secreto impenetrable la excusa que ha dado mi defendido, de que se fugó porque querían prenderlo?

Si se impusiese la última pena y después más ó menos tarde se levantase la punta de ese velo y apareciese en efecto que había existido aquel estímulo, ¡qué dolor! ¡Una pena irreparable que no se hubiera impuesto mediando el antedicho estímulo como circunstancia atenuante!!! No quiero decir más.

Concluyo recordando al tribunal que en las tres diversas hipótesis que he establecido al principio, la que el señor fiscal pide que sea la última pena debe ser la absolución libre y la reparación consiguiente, conforme al art. 8.º de la Constitución.

Me lionjeo de haber demostrado lo que no hay procedimiento legal, que si lo hubiera, la aplicación del indulto es indeclinable, y que aunque nada de esto tuviese lugar, no hay ley penal aplicable, ni cuerpo de delito apreciable, habido y guardado el debido respeto á la Constitución vigente.

En el hecho de que en esta causa se trata, no hay nada serio, sino una manifestación política. No hay nada serio, digo mal, hay dos cadáveres en Iglesuela, y yo tengo el profundo convencimiento y la fundada esperanza de que no habrá el tercer por decreto ó sentencia de este recto é ilustre tribunal.

He dicho.

PARTE EXTRANJERA.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS.

(De la Agencia Fabra.)

PARIS, 9.—(A las diez y diez minutos de la noche, recibido el 10 á la una y media de la tarde y remitido á la agencia por un abuso inculcable á las seis de la noche.)

Graves acontecimientos han tenido lugar en el arrabal de Saint-Maur. Una lucha empeñada empezó anoche en dicho barrio, y los perturbadores han levantado muchas barricadas que han defendido con energía.

Las tropas de infantería, apoyadas por cargas de caballería, se han apoderado de todas las barricadas.

El número de muertos y heridos es de 150 poco más ó menos.

Luchas menos importantes han tenido lugar en otros barrios, pero en el centro de la capital la tranquilidad no ha sido hasta ahora perturbada. (N. de la A.) Este parte es anterior al que con fecha de hoy ha sido comunicado por la Agencia.

LONDRES, 8.—El Parlamento se ha abierto hoy sin solemnidad. El presidente del Consejo ha leído el discurso de la Reina. Este documento es sumamente pacífico y hace constar las relaciones satisfactorias que existen entre Inglaterra y las demás potencias.

Ocupase principalmente de las cuestiones interiores. Los acontecimientos de París preocupan mucho la atención pública.

(De la Agencia Havas.)

PARIS, 8 (á las 12 y 45).—El número total de

las prisiones hechas anoche es de 150. Flourens no ha sido preso.

Flourens y Bologne impidieron el asesinato del comisario de policía que habían traído con ellos después de la reunión de la Villette.

Hoy la tranquilidad es completa en todas partes.

PARIS, 8 (á las 5 y 20 de la tarde).—Cuerpo legislativo.—Emilio Ollivier, contestando á una interpelación, dice que el Gobierno, respetando el palacio del Cuerpo legislativo, no había querido detener á Enrique Rochefort á su salida de la sesión: 50 amigos le esperaban en el patio del Cuerpo legislativo, y 200 en los alrededores.

Después Enrique Rochefort fué buscado, pero no encontrado.

Mientras tanto, la reunión de la calle de Flaudres decretaba la insurrección, esperando la llegada de una señal de Rochefort, y el Gobierno se había preparado á hacerle prender antes de su entrada en esta reunión.

Ocho barricadas que se habían formado han sido tomadas sin efusión de sangre.

La fuerza armada ha dado prueba de una gran moderación.

Si los desórdenes se renovaran, el Gobierno no teme nada, porque la población parisiense está con él.

Si el Gobierno quería obrar severamente la agitación no duraría cinco minutos.

A pesar de las reclamaciones de Keratry, la Cámara vuelve á la orden del día.

Elección del departamento de Ande, Guiraud, candidato clerical, ha sido elegido por 10,208 votos contra 8,741 dados á Pereire. En el departamento del Isere, Marion ha sido reelegido. En Saint-Malo no hay mayoría absoluta y será necesario un nuevo escrutinio.

(Estos despachos han venido por el correo.)

PARIS, 8 (á las ocho y cuarenta y cinco de la noche).—Asegúrase que todos los redactores de la *Marseillaise* han sido presos, exceptuándose Arould que se escapó, y que un comisario de policía ha hecho una pesquisa en las oficinas de este periódico.

Las noticias particulares de ayer de París, según *La Correspondence*, dan por terminados los trastornos. La agitación había cesado y los obreros acudían á las fábricas.

La emperatriz está pasando la gripe y el príncipe imperial restablecido.

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

MADRID, 11 DE FEBRERO DE 1870

ACTA DE JÁTIVA.

Al decidir el partido carlista lanzarse á la lucha electoral, sabía demasiado, como decía ayer nuestro amigo el Sr. Vinader, que no lograría el triunfo material, porque en los países regidos por el parlamentarismo, y singularmente en España, no se ha dado jamás el caso de que no venza el Gobierno, cualquiera que sea; pero estaban seguros también los carlistas de demostrar su número, su fuerza, su prudencia y disciplina, apareciendo á los ojos de España como una esperanza de días mejores.

Ambas cosas han sucedido como habían previsto, si bien los abusos, violencias, intrigas y fraudes de los revolucionarios han llegado hasta lo inconcebible, arrebatando el triunfo á cuatro ó seis candidatos carlistas, á quienes los mismos periódicos liberales daban como segura la victoria.

Uno de los que se encontraban en este caso, era el ilustre conde de Morella, el invicto general Cabrera, á quien los carlistas de Játiva quisieron, no traer al Congreso, sino darle una prueba de entusiasta simpatía, haciéndole triunfar en las elecciones. Todos los días los periódicos de la provincia de Valencia han considerado á D. Ramon Cabrera como diputado electo, y así aparecía en los escrutinios parciales que publicaban. De pronto, sin saber cómo ni cuando, el candidato ministerial obtiene la mayoría, y va aumentando su número de votos, mientras que los del caudillo carlista se estacionan, cuando faltaban los votos de comarcas enteras de la circunscripción, donde el número de carlistas es muy grande.

El milagro estaba hecho: á nadie debe extrañar. D. Ramon Cabrera es la representación más genuina del partido carlista, ¿qué acusación, pues, qué condenación más grande para los hombres de la revolución, que la presencia moral y el nombre de don Ramon Cabrera en las Cortes Constituyentes? ¿Qué remordimiento y qué vergüenza no hubieran sentido aquellos y qué comparaciones no hubiera hecho el pueblo?

Por eso era preciso que el general Cabrera no saliese diputado; á más de que su triunfo hubiera causado gran disgusto á los revolucionarios, por ser aquel el primer jefe del partido carlista, el primer súbdito del rey. ¿Cómo, pues, no habían de hacer los liberales, todo, absolutamente todo lo que pudieran para evitar este triunfo?

Mas el partido carlista ha quedado satisfecho. No siente despecho ni humillación, como decía ayer el Sr. Rivero. El general Cabrera ha recibido la prueba de entusiasta simpatía que se propusieron darle los electores de Játiva. Docé mil hombres han votado por él en las elecciones, según los mismos datos oficiales; y si no aparecen 15 ó 16,000 votos, y si no ha sido proclamado diputado, España toda sabe por qué; sabe que cuando los ministeriales se empeñan en ganar una elección, la ganan.

Así lo decían ayer nuestros amigos los Sres. Vinader y Muzquiz, en la discusión de las actas de Játiva. Multitud de atropellos é ilegalidades se han cometido con los carlistas; las autoridades han preso á electores carlistas que estaban reunidos para deliberar; en algunas partes no se han repartido oportunamente las cédulas; se ha recurrido al garrote, al puñal, al fusil, para impedir la elección á los carlistas; se les ha procurado intimidar con amenazas, y por último, el gobernador de la provincia y el vicepresidente de la diputación provincial, han recorrido el distrito, desplegando todo género de influencias.

Después de esto, todavía dicen los ministeriales: ¡hemos vencido! ¡el general Cabrera ha sido derrotado en las urnas!

Hermosa victoria por cierto. De nada sirve que el Sr. Rivero niegue los hechos denunciados por nuestros amigos, fundándose en que no presentan pruebas y en que el acta del Sr. Genís viene limpia. Los abusos y atropellos electorales de Játiva son públicos y notorios en toda la circunscripción; y

en cuanto al acta del Sr. Genís, ¿no dijeron los mismos señores de la comisión que los electores carlistas de Enguera reclamaron *á tiempo*, y que su reclamación y su protesta fueron desatendidas? ¿Cómo, pues, no ha de venir limpia el acta del Sr. Genís, si no aparece en ella más que lo que al Gobierno le conviene?

El Sr. Rivero repitió la canción de siempre, censurando á los carlistas porque se quejan y no acuden á los tribunales. Cuando el subsecretario de Gobernación, Sr. Morret, se lamenta de la deplorable administración de justicia de España, nada tenemos que decir nosotros. No recordamos que tribunal alguno haya encausado á ningún alcalde ó gobernador por abusos y atropellos que hayan cometido, si han redundado en beneficio del Gobierno.

España sabe que el partido carlista no obtendrá completa justicia, como no la alcance por sí mismo.

Por nuestra parte, tenemos el consuelo y la alegría de verle crecer diariamente, mostrándose poderoso y fuerte ante sus enemigos. Así lo confesaba ayer el mismo señor Bugalla; quien, muy injusto con los carlistas, decía, sin embargo, que hasta los suyos, es decir, los isabelinos y moderados, se vienen á nuestra bando, que es el único refugio, la única esperanza de la patria.

TONTERÍAS DE LA ÉPOCA.

Al contestar á uno de nuestros artículos sobre los que ha publicado *La Epoca* dando consejos á las clases conservadoras, nos dirije este requiebro: «Comienza EL PENSAMIENTO diciendo una tontería.» Maravillados de que *La Epoca* sea capaz de comprender lo que es una tontería, ¡*La Epoca*, órgano del marqués de Miraflores! nos hemos apresurado á examinar la frase ó las frases en que semejante tontería expresamos, y hé aquí lo que *La Epoca* nos echa en rostro. Dijimos que si en Francia ha estado á punto de haber un 48, con el emperador Napoleón al frente del Gobierno, aquí sucedería en España con un niño, hoy que en toda Europa reina una agitación tremenda?

Esto para el periódico afrancesado es una tontería. Veamos lo que el tal papel entiende por discreción:

«Precisamente si la agitación revolucionaria, que en la capital de Francia ha surgido en los últimos meses, no ha llegado á tomar importancia alguna, consiste en el cambio político que el emperador acaba de inaugurar en sentido liberal y parlamentario: cambio sin el cual es seguro que la perturbación hubiera sido mucho más general, honda y grave. Si EL PENSAMIENTO fuese capaz de reflexión cuando se trata de un asunto que repugna á sus ilusiones y ambiciones, comprendería que la libertad que desprecia es una fuerza, cuando no degenera en licencia, y que las ideas, los principios, valen más que las personas. Eso prueba el ejemplo de la Francia que tan fuera de propósito ha citado EL PENSAMIENTO.»

La profundidad de este discurso, recitado en el tono usual de quien ha hecho acopio de sabiduría para repartirla caritativamente entre los pobrecitos mortales que estamos siempre en Babilonia, nos ha dejado como la mujer de Lot, convertidos en estatua de sal. Al fin caemos en la cuenta de que somos tontos de capriote, ó de que *nuestras ilusiones y ambiciones* nos hacen incapaces de reflexión; porque de otra manera, ¿cómo hubiéramos dejado de comprender que precisamente no ha sido mayor la agitación revolucionaria en el vecino imperio, porque acaba de inaugurarse el sistema liberal y parlamentario? ¿Cómo puede escaparse á nuestra penetración que si el emperador, en diez y ocho años de Gobierno personal, ha conservado la paz en Francia, y la ha perdido en cuanto ha planteado el sistema parlamentario, es porque el sistema parlamentario mantiene mejor el orden que el Gobierno personal? El raciocinio de *La Epoca*, que en esto de raciocinar el periódico afrancesado no se parece á nadie, está reducido á lo siguiente: Napoleón ha vivido en paz durante diez y ocho años de Gobierno personal; inaugura el sistema parlamentario, y durante un año tiene que sofocar dos sublevaciones en las calles de París. A cualquier tanto se le ocurre creer que estas sublevaciones son efecto del parlamentarismo, de la libertad de imprenta, de reunión, etc. Pues no señor; nosotros los sabios, nosotros los oráculos decimos que estas sublevaciones hubieran sido más temibles si no se hubiera inaugurado el sistema liberal.

Por lo visto, el sentido común no es patrimonio de los oráculos. Hay una inteligencia especial reservada para estos seres privilegiados y á la cual no alcanza la tontería nuestra. ¡Qué le hemos de hacer! Si no fuera por faltar al respeto debido al oráculo, nos atreveríamos á calificar de simpleza el raciocinio del periódico afrancesado. Traeríamos á su memoria, en prueba de ello, que Luis XVI perdió la cabeza por echarse en brazos de los liberales: verdad es que si no hubiera hecho esto, ¡vaya Vd. á saber lo que hubiera perdido! Por liberales dieron con su corona en tierra Carlos X, Luis Felipe y Francisco de Nápoles; á Fernando VII se le quiso declarar loco por transigir con los liberales; á Cristina y Espartero los expulsaron por liberales ó igualmente á doña Isabel II. Todo esto no vale nada para el oráculo de la calle de las Torres. Todo esto es pura tontería. ¡Ya se ve! En no hablando de clases conservadoras, de conciliaciones prudentes, de libertad hasta cierto punto, y de orden con su cuenta y razón, ¿de qué se ha de hablar que merezca la atención del sapientísimo diario? ¡Historia, sentido moral, sentido común, lógica! ¿Qué valen semejantes cosas en comparación de la pureza del sistema parlamentario que es panacea universal?

El periódico afrancesado concluye manifestando, entre algunas vulgaridades de carácter progresista, que el país no responde á la voz de D. Carlos.

Escusamos entrar en esta cuestión, porque ni espacio tenemos para tratarla hoy. Pero notaremos una cosa, y es, que en efecto *La Epoca* debe creerlo así, porque estamos seguros de que ese periódico no ha de ser de los últimos en proclamar á don Carlos como rey de España.

Cuando un periódico, que aun entre los suyos ha ganado la fama que indica el so-

brenombre de *Parcialista* con que le calificaba *La Política*, se permite alterar deliberadamente el sentido de nuestras palabras y contraponer a ellas, por vía de razones, una rotunda de insultos y desvergüenzas, exiéndole a los que con él hablan de todo género de consideraciones, é incita a que se señale con el dedo a la personalidad que tras él se oculta para que el público entienda el aprecio que debe hacerse de sus argumentos.

Combata en buen hora *El Imparcial* nuestros artículos; discútalos con buena fe, si es que puede, y no nos hará caer en la tentación de citar nombres propios. Y de paso es bueno advertir que nosotros nunca hemos incurrido en el descuido de citar nombres propios con relación a la vida privada, ni mucho menos para calumniar y difamar, como repetidas veces le ha sucedido a *El Imparcial*, que en este punto está en el caso de recibir lecciones de todo el mundo.

Pero dejando esto a un lado, y lo de si queremos o no queremos que se publiquen las vidas y milagros de los *neos*, en lo cual puede hacer *El Imparcial* lo que guste, bueno es que conste que el diario noticioso-democrático nada tiene que contestar al recuerdo que le hacíamos de las vergonzosas y repetidas súplicas que los liberales dirigieron a Luis Felipe para que les ayudara con su ejército a combatir a los carlistas durante la guerra civil.

No sabemos si nosotros hubiéramos procurado la intervención francesa del año 23; pero lo que sabe todo el mundo es que aquella intervención fué bendecida por muchos liberales que, habiéndolo sido de buena fe, se daban por muy satisfechos de haberse librado de aquella turba de demagogos que se apoderaron, como siempre, por la traición y el perjurio de las riendas del Estado.

No sabemos si hubiéramos procurado la intervención francesa, pero de seguro nos hubiéramos considerado más honrados con ir a la vanguardia de los cien mil hijos de San Luis, que peleando al lado de los que movidos por su ambición, y negándose vergonzosamente a arrostrar el plomo de los insurrectos americanos, abandonaron la defensa de la integridad del suelo patrio. ¡Esta sí que fué ignominia; esta sí que fué vergüenza! Y aún se jactan de ella los partidos liberales!

Y de la guerra de la Independencia, ¿la cual llama intervención *El Imparcial*, y parece que quiere atribuir a los absolutistas, ¿qué hemos de decir? ¿Quiere, por ventura, *El Imparcial*, hacer olvidar a los buenos españoles que los afrancesados del año 1808 han sido después fervientes liberales? Sin salir del círculo de los hombres que hoy figuran en los partidos revolucionarios, ¿cuántos apellidos hay que recuerdan a los entusiastas partidarios de la política de José Bonaparte!

Pero concluyamos: *El Imparcial* para justificar el inusitado ataque que ayer nos dirigió, se apoya en la autoridad de *El Universal*, que también ha dicho que deseamos una invasión extranjera. Hace mucho tiempo que nos parece que *El Imparcial* figura muy dignamente al lado del periódico que más groseramente habla del Papa y de las cosas religiosas, y en donde un Cura escribe pidiendo la abolición del celibato eclesiástico.

Anteayer se vió en la Audiencia la causa que a D. Lucio Dueñas, Cura ecónomo de Alcabón, y otros, se sigue por conspiración carlista.

Defendió al Sr. Dueñas, condenado en primera instancia a quince años de cadena, y contra quien el fiscal de la Audiencia pide la pena de muerte, nuestro amigo el señor Trelles. Los demás procesados fueron defendidos por el joven Ladrado, colaborador de *El Pensamiento*, D. Fernando Brieva y Salvatierra.

De la defensa del Sr. Trelles pueden juzgar nuestros lectores, que para eso, y especialmente para que el público conozca la escasa importancia de los cargos que resultan contra el señor Cura ecónomo de Alcabón, la publicamos en otro lugar, retirando varios originales, algunos de suma importancia. De la defensa del Sr. Brieva también nuestros lectores juzgarán en su día, pues prometemos publicarla tan pronto como nos sea posible.

Ambos letrados, el Sr. Trelles sobre todo, merecen los plácemes de la comunión católico-monárquica, por el acierto y actividad con que se consagran a la defensa de estos y otros varios procesados.

Por de pronto, nosotros no dudamos de que, atendidos los méritos del proceso y las razones alegadas por los defensores, la Audiencia, lejos de acceder a la petición fiscal, absolverá en el presente caso a todos o casi todos los acusados.

Gran satisfacción sería esta para nosotros, para los señores defensores, y para los infelices procesados, que gimen meses hace en dura cárcel bajo el peso enorme de una grave acusación.

Quiéralo Dios.

Por insertar hoy en *El Pensamiento* la defensa del señor Cura ecónomo de Alcabón, que no podíamos demorar un solo momento, no publicamos la sesión de Cortes de ayer tarde, en la que fué discutida y aprobada el acta de Jativa. Mañana, Dios mediante, suprimiremos esta omisión tomando del *Diario de Sesiones* los discursos y rectificaciones de los Sres. Vinader y Muñiz.

También hemos tenido que retirar un largo artículo sobre el aniversario de la reunión de las Cortes Constituyentes, hecho que tuvo lugar el 11 de Febrero de 1869. Mañana igualmente publicaremos este artículo.

Ayer anunciábamos la aparición de un periódico moderado, *El Eco de España*, defensor de la restauración de doña Isabel II. Hoy tenemos que anunciar la publicación del primer número de *El Tiempo*, periódico diario, como el anterior. La diferencia que existe entre uno y otro periódico parece que consiste en que *El Tiempo* viene a trabajar para la agrupación de todos los elementos moderados al rededor de la bandera del príncipe Alfonso, al paso que *El Eco* sostiene

no debe imponerse a doña Isabel la abdicación, sino dejar este asunto al juicio de la augusta señora destronada en Setiembre.

Aunque *El Tiempo* dice que entre los personajes que apoyan su publicación no hay inspiradores ni inspirados, saben cuantos se enteran de lo que ocurre en política que los personajes no inspirados ni inspirados de *El Tiempo*, reconocen todos como jefe o director al señor conde de San Luis, al paso que los 140 accionistas de *El Eco* tienen como gerente, digámoslo así, de la sociedad que forman al Sr. D. Agustín Estéban Collantes.

De modo que los partidarios de la dinastía caída se presentan hoy divididos en dos agrupaciones, capitaneadas por dos personajes políticos que se habían mostrado unidos desde 1854, en que formaron parte de un mismo ministerio. No sabemos todavía a punto fijo qué personajes políticos pertenecen a cada una de esas agrupaciones; pero aunque parezca extraño, hemos oído decir que el señor conde de Cheste milita a las órdenes del señor conde de San Luis.

Ya que nos falta espacio para hacernos cargo de todo lo que hoy contiene *El Tiempo*, nos limitaremos a reproducir cuatro líneas de su primer artículo. A la obra de destruir la dominación revolucionaria dice que han de contribuir todos:

«..... los hombres civiles con su influencia sobre la opinión, y los que ciñen espada siendo el brazo ejecutor de los juicios de esa opinión, y el que realice sus aspiraciones.»

De suerte que, a lo que parece, *El Tiempo* es de la misma opinión de muchas personas respetables, que, por uno de esos errores inconcebibles, suponen que el actual *imbroglio* político no puede resolverse sino a tiros. Esta opinión, que como indicamos, tiene muchos, muy respetables sostenedores, no deja de tener también algún impugnador que, como *La Época*, quiere oponer a la violencia la discusión y los artículos de periódico.

Continúan los diarios liberales no dejando a sol ni a sombra a los carlistas.

No estamos de humor para entrar a nuestros lectores de las simplezas revolucionarias. Verdad es que no se pierde mucho con ignorarlas.

Hemos notado que nuestra correspondencia del extranjero sufre detenciones sospechosas, y hasta se nos entrega sin el sello que expresa la fecha de su arribo a Madrid.

Todas las cartas que recibimos están a la disposición de la autoridad, porque no tenemos que ocultarle nada; y tenga entendido quien deba tenerlo, que no somos tan torpes, que si tratásemos de ocultar algo confiaríamos nuestros secretos al correo.

Para ignominia de la situación presente publicamos algunos párrafos de una carta que recibimos de Valladolid, donde, como saben nuestros lectores, ocurrió días pasados una especie de pronunciamiento porque no pagaba la diputación sus asignaciones a las armas de cría del hospicio.

Dice así la carta a que nos referimos:

«Pueden Vds. insistir en que la situación de este hospicio es desesperada; que si no fuera por la caridad de algunos particulares ya se habría cerrado, y aún así, no me parece está lejos el día en que tenga que cerrarse. Son considerables las cantidades que deben a todos los abastecedores de comestibles. A las amas también las deben dos o tres meses. Según me han dicho, el gobernador, sabiendo que la administración de Hacienda tiene una cantidad con destino a dicho objeto, ha reclamado al Gobierno exponiendo la gravedad de la situación y la inminencia de un conflicto, pero de la dirección del Tesoro hay órdenes terminantes para no soltar un cuarto.»

Noticias tomadas de los periódicos de anoche: «El Sr. Satorres, cónsul en Bayona, ha sido trasladado con igual cargo a Alejandría.

—Esta noche se reúne la comisión de ley electoral con el ministro de la Gobernación.

—Ha sido nombrado cónsul en Bayona el señor D. Manuel Alarcón.

—Por la estafeta de pasado mañana se mandan al virey de Egipto las insignias con que ha sido condecorado por el Gobierno español.

—El Sr. Piot, cónsul que era en Alejandría, ha sido trasladado a Lisboa con igual destino.

—Hoy se ha enviado a las Cortes por el ministerio de la Gobernación una comunicación pidiendo un aumento de 23.000 pesetas para atender a un crédito cerrado de establecimientos penales.

—Se han hecho vivas gestiones para que el señor Rodríguez Ramírez continuase de redactor jefe de *La Iberia*, y aún creemos que se sigue gestinando en este sentido.

—Al general Milans le ha sido concedida por reglamento la gran cruz de San Hermenegildo.

—Ha llegado a Madrid el coronel Escoda.

—Esta tarde ha quedado sobre la mesa de las Cortes una proposición de ley pidiendo que se derogue la de 1855, abonando los once años de cesantía a los empleados del 43.

—El diputado Sr. Franco Alonso ha presentado ya hoy la renuncia de su cargo de representante de León como consecuencia de su nombramiento que hoy publica la *Gaceta*.

Segun un periódico republicano, desde la revolución se han cerrado en Madrid más de 4.000 establecimientos industriales o de comercio, lo cual basta a demostrar la ruina de innumerables familias, la disminución de los recursos del Tesoro y la espantosa decadencia a que ha venido el país.

La *Gaceta* de hoy no contiene ninguna disposición de interés general.

Si hemos de creer a *El Pueblo*, por fin parece que la anunciada revista o gran parada tantas veces suspendida, se verificará al fin, si el tiempo lo permite, el domingo 13.

Segun el diario republicano, asistirán a ella unos 16.000 hombres de todas las armas del ejército y los batallones uniformados de la milicia.

En la sesión de anoche fué aprobado el capítulo 31 relativo a los gastos de la quinta. Después de un ligero debate en que tomaron parte los Sres. Ramos Calderón e Izquierdo, fué aprobado el capítulo 32, sin discusión hasta el 41.

En seguida principiá a discutirse la totalidad del presupuesto de Marina.

Noticias tomadas de *El Imparcial*: «Las actas más graves de las últimas elecciones son las de las circunscripciones de Vich, Avilés, Oviedo y Jerez.

—Declase anoche que algunas diputaciones provinciales habían anunciado su dimisión con motivo de la cuestión de arbitrios.»

CORREO DE HOY.

El *Univers* habla de un *Schema* anónimo pidiendo la infalibilidad. Este documento que circula por Roma, y que publican el *Univers*, y el *Diario de Barcelona*, dice:

SCHEMA

para la definición clara y lógica de la infalibilidad del Romano Pontífice, según los principios ya recibidos por toda la Iglesia.

«A los errores contra la primacía ya condenados pueden hacerse las siguientes ó parecidas adiciones, si fuesen aprobadas, en la cláusula concerniente al Pontífice romano:—Reprobamos completamente la temeridad de aquellos que pretenden apelar de los juicios definitivos del Soberano Pontífice ante el Concilio ecuménico. Condenamos completamente los perversos sofismas de los que se atreven a afirmar que únicamente la sumisión externa y no el asentimiento interno del corazón y del pensamiento, es lo que debiera concederse a los juicios del Pontífice romano.

Además, condenamos completamente el método de hablar y de enseñar de aquellos que fingiendo temerariamente una inoportuna división entre la Asamblea de los Obispos y el Sumo Pontífice, disputan acerca de cuyas dos autoridades es más grande, esforzándose de este modo en separar y desunir la cabeza del cuerpo, a Pedro de la Iglesia; como si este cuerpo de hermanos por quien se ha ordenado que Pedro fuese confirmado en sus sucesores, pudiera separarse de aquel cuya autoridad, por la promesa de Jesucristo, no faltará nunca; ó como si a aquellos que han de ser enseñados y confirmados por Pedro se les pudiera permitir enseñar y confirmar contra él. Ni juzgamos tampoco que deba ser menos reprobada la opinión y la acción de aquellos que, a fin de que los errores condenados por el Sumo Pontífice puedan difundirse más entre los ignorantes, no temen asegurar que el verdadero sentido de los libros que contienen las proposiciones condenadas no han sido bien comprendidas por el Pontífice.

Razones en las cuales se apoya la oportunidad de este *Schema*.

1. Es de esperar que un *Schema* de esta naturaleza merecerá la aceptación de todos los Padres y que será votado casi por unanimidad, puesto que contiene los verdaderos y sólidos principios de la doctrina católica admitida ya por la Iglesia universal, los cuales todos reconocen y profesan, con raras excepciones, cuyo número por ser tan limitado, carece de importancia.

2. Este consentimiento de todos, ó casi todos los Padres, es no tan sólo conveniente, sino que es absolutamente solicitado cuando se trata de definir las bases mismas de la doctrina; es especialmente necesario en una materia tan grave que si fuera posible debería definirse sin un solo disenso.

3. En la actualidad una unanimidad de esta especie es sobre todo necesaria, á causa de los rumores esparcidos entre las gentes y generalmente creídos de que existen grandes disensiones entre los Padres con este motivo. Una definición unánime dada por los Padres, cerraría completamente la boca a nuestros enemigos, que tan temerariamente se regocijan hoy, y ensalzaria de una manera grandiosa la Iglesia de Dios. Además, tenemos demasiados enemigos fuera para dejar que se levanten ó fomenten nuevas disputas dentro del campo de la Iglesia.

4. El medio propuesto de definir por implicación, aunque indirecto, aparece no obstante sobrepajar á todos en fuerza y sencillez. Es muy claro, y quizás de más valor que una definición explícita y formal. El último medio ofrecería realmente á los teólogos muchas ocasiones para torcer; disputarían continuamente entre sí acerca de cuándo y en qué circunstancias el Sumo Pontífice se dirigía á toda la grey de Jesucristo ó lo que debía considerarse como un juicio infalible. Todas las cuestiones que se han agitado hasta ahora, aun entre los defensores más adictos de la infalibilidad del Papa, tocan a la facultad pública y privada del Pontífice como maestro, el verdadero significado de la palabra *ex-cathedra* y las materias que realmente se refieren a la fe y a la moral, quedarían sin resolver. Cuestiones de esta especie estallarían indudablemente con violencia y se llevarían adelante con un grande espíritu de controversia.

5. En el *Schema* propuesto de definición, ni se hace, ni se pide ninguna distinción expresa. Combinamos en él la imposibilidad de error del Sumo Pontífice, con la infalibilidad de la Iglesia misma, estableciéndola como el resultado lógico ó el corolario de su primacía, de modo que la lleva tan lejos y está contenida dentro de los mismos justos límites que la infalibilidad de la Iglesia y su divina primacía, cuyos principios de fe fueron suficientemente fijados y determinados desde el principio de la Iglesia. Una definición formal que se extendiese con toda su fuerza á los siglos pasados, abriría todo el campo de controversia de la historia eclesiástica y todas las bulas pontificias á las disputas de los teólogos, y renovaría las acusaciones, hoy casi extinguidas, de los herejes y de los ateístas contra los Pontífices romanos.

Empleando este medio de definir, no se ofrece a los teólogos ni a los fieles ocasión para luchar ni cuestionar acerca de los mandatos y decretos del Sumo Pontífice, á cuyos sabios consejos, mientras él apacienta su rebaño, se deja, como sucede a un hijo para con su padre, respetuosa y cariñosamente que determine todas las cosas.

El *Telegrafo Autógrafo* del 9 refiere los sucesos ocurridos en París la noche anterior en los siguientes términos:

«Los acontecimientos de anoche y el cúmulo de noticias que llegan a la nuestra, nos obligan a retirar parte de nuestro original y a dar todas las que conocemos.

A las ocho de la noche.—Son detenidos tres omnibuses en la calle del Faubourg del Temple, un poco más arriba de la calle de Saint-Maur. Desembarcados los caballos, montan en ellos el cocher y el conductor, y se marchan al trote.

Dos de los omnibuses son colocados de lado al través de la calle, uno inmediatamente al otro. El tercero puesto en frente de los otros formaba como un primer cuerpo de barricada.—Esta la formación como unos sesenta jóvenes, cantando la Marsellesa.—Se rompió el timón de uno de los coches y lo clavaron en la barricada; pásose en el extremo de este por un joven acostumbrado a subir a los mástiles de las cuecas un farol de los omnibuses, gritando desde arriba: ¡viva la república!

En este momento llega una fuerza de sargentos de villa, compuesta de unos cien hombres

próximamente, formada en cuatro en fondo, y dispersando los grupos bastante numerosos que estaban parados a ambos lados de cada uno de los extremos de la calle, y especialmente en el ángulo que forman las calles Fontaine-au-Roi y Bichat y en frente del pasaje Joinville. Al mismo tiempo, un destacamento de guardias de París, á pie, precedidos de cinco tambores, bajan la calle de Faubourg del Temple, viniendo de los boulevares exteriores, y hacen recular de los omnibuses al paso. Agitadores y curiosos se encuentran entre ambas fuerzas. Las voces de mujeres y de niños, la oscuridad de la calle, en parte de la cual apagaron el gas, las tiendas cerradas por todas partes, excepto algunas tabernas, en fin, el son lúgubre de los tambores ofrecía todo un espectáculo imponente digno de ser visto y oído.

A la aparición de los municipales, salió un grito de guerra la muchedumbre. «¡Ahí están los asesinos!» El público se precipita hacia las puertas de los pasajes, que son muchos en la repetida calle del Faubourg del Temple. En el pasaje Tonville pretenden cerrar las rejas los primeros que en él se refugiaron; pero los recién llegados se oponen, á fin de que no se les corte la retirada por ese lado, gritando: «Es preciso que todos se escapen.»—Los sargentos de villa facilitan la retirada del público por las calles contiguas, sin atropellar a nadie.

A las nueve.—En la calle de San Mauro-Popincourt, enfrente de la Fontaine-au-Roi, una veintena de individuos, la mayor parte de blusa y pantalón azul, forman una barricada con maderos. Esta está evidentemente destinada a impedir el paso de la caballería por la mencionada calle de Fontaine-au-Roi. Allí apagan el gas. Los curiosos, bastante numerosos en este punto, reñan entre ellos con rapidez, y, para dirigirse al boulevard de Belleville, intentan pasar por la calle de Trois Bornes, pero se lo impide una barricada formada con un fardo, y otros varios útiles. Sigue cantándose la Marsellesa.

Desde la calle del Faubourg del Temple, desahogada de gente por medio de algunas cargas dadas por los sargentos de villa, se oyen aterradores gritos y exaltadas exclamaciones de cólera.—Atrojados de la calle de Trois-Bornes, se refugian los curiosos en la de Angulema.—Un grupo de una docena de hombres vestidos con blusa apagan el gas por donde pasan, por medio de un palo largo, y derriban una columna de anuncios luminosos. Ciérranse las tiendas y hasta la calle de Folie Mericourt reina completa oscuridad.

Nueve y media.—En la calle de Angulema apagan el gas los mismos individuos al grito de ¡viva la república!—Cerca del canal de San Martin un grupo de cien personas aproximadamente, á las voces de ¡viva la tropa! (sin embargo de que no se veía parálisis ni un solo soldado) cantan al mismo tiempo: «*Aux armes citoyens!*»

A las nueve y tres cuartos.—El boulevard de la Villette está desierto. En cada esquina de la calle de París hay un grupo de unos veinte sargentos de villa, entre los cuales es preciso pasar para dirigirse al boulevard de la Villette ó al de Belleville.

A las diez.—Llega una patrulla de cuarenta guardias de París á caballo, que toma posesión en una estación de omnibuses en el boulevard de la Villette. Los guardias de París de infantería llegan a la calle del Faubourg del Temple y forman en batalla en el boulevard de Belleville. Corre el rumor entre los amotinados, que Mr. Florens está en la calle Faubourg del Temple y que quieren prenderle.

Lo que dió pábulo á este rumor, fué, que la vanguardia apostada en el boulevard de la Villette detuvo á cierto número de transeúntes y á un carruaje que procuraban ponerse á retaguardia de los guardias municipales, para dirigirse sin ser molestados al boulevard antes citado. Tanto los transeúntes como la persona que iba en el carruaje, se ven obligados á identificar sus personas y á dar sus nombres antes de proseguir su ruta.

A las diez y media.—Es considerable el número de curiosos en la plaza del Chantant d'An. Al lado de la fuente había como unos doscientos sargentos de villa.

A las once.—Los sargentos de villa dan una carga en la plaza de Chateaux d'Eau. Unas cincuenta personas son hechas prisioneras. Resultan algunos heridos y contusos. La banda se dispersa gritando ¡viva Rochefort! ¡viva la república!

A las dos de la mañana.—Un ayudante de campo y dos guardias de París atravesaron á escape técnico por el boulevard Montmartre con dirección a la Bastilla. Un regimiento de cazadores, precedido de un pelotón de husares y de otro de guardias de París, subió por el boulevard en sentido inverso, dirigiéndose hacia la Magdalena y desahogando los grupos que estacionaban en el ángulo del Faubourg Montmartre, quedando completamente restablecida la tranquilidad en este punto. Ni en la puerta Saint Denis, ni en la plaza de Chateaux d'Eau había grupos. La puerta del cuartel permanecía cerrada, viéndose solamente el centinela de costumbre que se pasaba impasible.

A las tres de la mañana.—La calma quedó restablecida por todas partes, y el movimiento parecía haberse terminado.

A las cuatro de la mañana.—Un oficial que volvía de Belleville, nos aseguró que no es cierto, como se ha dicho, que ninguno de sus compañeros haya sido muerto.

A las siete de la mañana.—Todo parece haber concluido. Las tiendas se abren, como de costumbre, y se ve á algunos obreros acudir á su trabajo.

Fuertes destacamentos de sargentos de villa pasean los boulevares. Todos los presos, que lo han sido durante la noche, están en el cuartel del príncipe Eugenio.

A las doce del día.—Reina tranquilidad en todos los barrios de París, y á la mayor parte de las obras y de los talleres han acudido los obreros. El comercio en general se muestra muy poco satisfecho de estos acontecimientos, y se habla de una exposición que parece se presentará á la Cámara firmada por un gran número de dueños de tiendas, solicitando que el Gobierno proceda enérgicamente para evitar escenas tumultuosas.

Ampliando algunas de las noticias que damos en otro lugar, añadiremos que parece que anoche ha sido también saqueado el almacén de un quincallero; y que han tratado de prender fuego á una iglesia que está en construcción.

Estas dos noticias han hecho mucho efecto en la parte sensata de la población que anatematiza enérgicamente semejantes excesos.

El mismo periódico, en su sección de última hora, añade:

A las siete de la noche.—Venimos de recorrer el Faubourg del Temple y los barrios de Belleville y la Villette.

Las tiendas están abiertas y todo parece haber recobrado su fisonomía ordinaria.

Solamente á la puerta del cuartel del príncipe Eugenio, hay un grupo como de unos 200 hombres en actitud pacífica y silenciosa.

En el patio del cuartel maniobra un regimiento de línea.

La Marsellesa no se ha publicado por estar presos todos sus redactores.

Esta noticia ha sobreescitado algo los ánimos,

y hay quien dice que producirá un nuevo conflicto.

El aspecto de la población, sin embargo, no tiene nada alarmante.

Nos dicen en este momento que por precaución se están cerrando algunos cafés y tiendas del Faubourg Montmartre.

En los boulevares hay grande animación de curiosos que se apiñan á los kioscos para comprar los periódicos de la noche con las últimas noticias.

Los armeros han retirado de sus tiendas los fusiles y los revolvers.

Se nos asegura en este momento que el Gobierno tiene tomadas fuertes precauciones para castigar severamente cualquier conflicto que esta noche pueda producirse.

Los fondos públicos han experimentado alguna baja.

A la salida del correo no ocurre ningún otro incidente digno de mencionarse.

La Marsellesa, periódico de Rochefort, ha publicado, con motivo de la prisión de éste, una declaración firmada por todos sus redactores, y en ella se lee lo siguiente:

«.....Esto es más que un insulto; es una provocación.

«Colaboradores, amigos, correligionarios políticos de Rochefort, continuaremos levantando con mano firme la bandera que sostenía con nosotros, y que volverá á encontrar cuando llegue el día, á no ser que nos la arranquen de las manos.

«Esta bandera es la bandera de la democracia socialista, de la reedificación implacable.

«Es la bandera del pueblo. Ella nos llevará á la victoria cuando el pueblo lo quiera.»

El *Parlement* dice que según la voz popular, ha habido 60 muertos y 90 heridos en los desórdenes de París.

Hé aquí, según *El Tradicional* de Valencia, cómo ha quedado constituida la Junta provisional católico-carlista de aquella capital:

«Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Sedañola.—Vice-Presidente, Sr. D. José Royo y Salvador.—Vocales: Excmo. Sr. Conde de Orgaz.—M. I. Sr. Barón de Terrateja.—Sr. D. Isidro Alcedo y Gonzalez.—Sr. D. Pascual Garrigues Bra.—Sr. D. Jaime Beltran y Juan.—Sr. D. José Gutierrez y Hernandez.—Sr. D. Cristóbal Mas y Grimalt.—Sr. D. Agustín Baldovi y Beltran.—Sr. D. Leon Aranz del Villar.—Sr. Don Eduardo Albacar y Ciurana.—Secretario: Señor D. Félix Zarranz y Beltran.—Vice-Secretario, Sr. D. Joaquín Vigil de Quinones y Galmés.»

TELEGRAMAS.

(De la agencia Fabra).

PARIS 11, (á las 7 y 38 minutos de la mañana).—La noche ha pasado con tranquilidad y esta capital ha vuelto á tomar su aspecto de costumbre. El frío es demasiado rigoroso.

ALEXANDRIA, 10.—La navegación por el canal de Suez toma cada día mayor extensión é importancia. Por órden del conde Darú, ministro de Negocios extranjeros, el cónsul de Francia ha felicitado al virey de Egipto por el espíritu de conciliación que ha manifestado en sus recientes dificultades con la Puerta Otomana.

(N. de la A.) La Agencia ha recibido esta mañana todos los partes atrasados; pero cree inútil su comunicación porque las noticias que contienen vendrán más detalladas en los periódicos de hoy.

PARIS, 9, (á las 7 y 50 minutos de la mañana.)

—El comisario de policía Lombard y varios agentes han sido heridos anoche. Las barricadas construidas en Belleville y en la Villette estaban defendidas por hombres armados solo con revolvers. La policía se ha apoderado de ellas.

A las dos de la madrugada la tranquilidad estaba restablecida en este punto.

También seguían tranquilos los barrios de la orilla izquierda del Sana.

A las cuatro de la madrugada algunos escuadrones de caballería han salido del cuartel del Chateau d'Eau para dispersar los grupos bastante numerosos que estaban reunidos en los boulevares del Temple, Beaumarchais y en la plaza de la Bastilla.

Las redacciones de la *Marseillaise*, del *Rapport* y de la *Reforma* están vigiladas por numerosos agentes de policía.

PARIS, 10, (á las 5 y 5 minutos de la tarde).—La tranquilidad parece completamente restablecida.

Los tribunales han nombrado a los jueces encargados del sumario, el cual ya está empezado. Seiscientos presos están reunidos en Santa Pelagia y en algunos depósitos de las casas de villa. Créese que mañana la mayor parte de los presos serán llevados al castillo de Vincennes.

Las tropas siguen consignadas en sus cuarteles, pero solo la guardia municipal y los agentes de policía quedan encargados de la conservación en las calles del orden público.

El periódico *El Parlamento* pretende que el conde Darú, ministro de Negocios extranjeros, se niega á nombrar á M. Prevost Paradol, ministro de Francia en Washington, porque su madre fué artista dramática. Créese que esta noticia no tiene fundamento.

PARIS, 10.—En la Bolsa de hoy se han cotizado:

El 3 por 100 interior español, á 22 1/4.
El 3 por 100 exterior id., á 26 5/8.
El 3 por 100 francés á 73 30.
El 1/2 por 100 á 104.
El 5 por 100 italiano á 54-75.

LONDRES, 9.—Consolidados ingleses, de 92 5/8 á 3/4.

ÚLTIMA HORA.

CONGRESO.

La sesión de hoy se abrió á las dos y media, bajo la presidencia del Sr. Ruiz Zorrilla. Leída y aprobada el acta de la anterior, un señor secretario preguntó si la cuarta sección se reuniría hoy para nombrar individuo de su seno que compusiera parte de la comisión encargada de examinar el proyecto de ley de reemplazos. Las Cortes así lo acordaron.

Continuando la discusión sobre el proyecto de ley de arbitrios provinciales y municipales, el señor don Sabino Herreros hizo uso de la palabra para contestar al Sr. Pi y Margall.

BOLSA DE HOY.

Títulos del

Nos dicen de Igualada que el día 8 estaban citados dos individuos de cada uno de los ayuntamientos de aquel partido judicial para nombrar un diputado provincial y un suplente.

Si esto es cierto, ¿quieren decirnos los diarios ministeriales que ley prescribe esta forma, nada liberal, de elección?

En Aracena se ha constituido la junta carlista, compuesta de los señores siguientes:

D. Manuel Fuentes, presidente; D. Raimundo Mená, vicepresidente; vocales: D. Rafael Librero, D. Federico Librero, D. Antonio Palacios, y don Tomás Méndez, secretario.

Nos escriben de un pueblo de la provincia de Huesca:

«Le suplico a Vd. tenga a bien dar cabida en su apreciable periódico a las siguientes líneas para que sepa España, Europa y el mundo entero lo que está pasando en la provincia de Huesca. Se están adeudando al culto las asignaciones de un año y al Clero las de once meses, y si el Gobierno va dilatando el cumplimiento de tan sagrados deberes, el culto de las iglesias va a quedar reducido a la miseria, y muchos párrocos en la necesidad de dejar sus pueblos con indecible dolor de su corazón.»

Estamos ya cansados de quejarnos al Gobierno del abandono en que tiene el culto y Clero. Es hasta falta de humanidad el dejar once meses sin paga a infelices que aun cobrando puntualmente apenas pueden vivir con lo que les da. Nada decimos del culto, porque cuantas razones alegásemos serían perdidas tratándose de políticos que han proclamado el ateísmo en la Constitución del Estado.

Escritas las líneas precedentes hemos sabido que en Zamora se le adeudan al culto tres meses, y doce al Clero.

¿Qué dirían los señores empleados de Madrid, y sobre todo los empleados que tienen asiento en el Congreso, si con ellos se hiciera lo que Figueroa está haciendo con Dios y los pobres Curas?

A instancia del alcalde de Don Benito el Gobierno acaba de conceder una estación telefónica en aquel pueblo importante de Estremadura.

Sabemos que en Soria va a constituirse de un día a otro la junta provincial carlista, si ya no está constituida.

Refiriéndose a noticias de Filipinas, dice el *Boletín Diplomático* que entre los personajes que asistieron al banquete oficial dado al duque de Edimburgo, no faltaron inconveniencias que pusieran en ridículo el nombre español y hasta hubo la imprudencia de brindar dirigiéndose al príncipe Alfredo, porque este personaje ocupara muy pronto el trono de España; brindis, añado, que no obtuvo el oportuno correctivo por parte del capitán general, aun cuando mereció del príncipe, no sólo una desdenosa acogida, sino un marcado desagrado, desentendiéndose en absoluto de tan torpe adulación.

Leemos en *La Correspondencia*: «Háblase de importantes comunicaciones mediadas entre algunos Gobiernos de Europa, respecto a la imponente actitud del republicanismo en varios países, y la necesidad de ponerse en guardia contra esa tendencia. Dicese que en esas comunicaciones se ha hablado de la situación interior de España.»

Dice un periódico que la autorización para procesar al Cardenal de Santiago la combatirán los Sres. Cisneros, Bugallí, Manterola, Muzquiz, Moreno Nieto, Figueras y Castelar, y la defenderán los Sres. Coronel y Ortiz, Monteverde, Balaguer y Montero Ríos.

Un periódico indica la posibilidad de que sea disuelta la Sala de Indias del Tribunal de Cuentas del Reino, constituyéndola en otro centro que responda a las atribuciones que le delegue el centro ministerial.

Según dice *La Correspondencia*, en la desestimación de la enmienda discutida anteaño en las Cortes en favor de las pensiones de San Hermenegildo, influyeron mucho, según se cree, los votos de los diputados reunidos el domingo en la Perla, cuyo grupo pasa ya de 50 diputados. Sin embargo, parece que no votaron anteaño. Y eso, que según nos dijo el mismo diario noticiario, dichos diputados sólo pensaban ocuparse en cuestiones económicas, ajenas a toda mira política.

Por el ministerio de Estado se ha dejado sin efecto el nombramiento de vicecónsul para Newcastle hecho a favor de D. Pascual Lescana.

—D. Fernando Rodríguez de Rivas y Rivas ha sido nombrado agregado supernumerario de la legación de España en Londres.

—El *Boletín Diplomático* dice que va a ser nombrado vicecónsul de España en Niza (cargo no retribuido) el Sr. D. Fernando Lagarrigue.

—D. Rodolfo Vidal ha sido repuesto en el destino de joven de lenguas en Tángier, y D. German María de Ory, que ocupaba esta plaza, ha sido destinado a Beyrouth a desempeñar el puesto de D. Juan Morphi, declarado cesante.

—Se ha dejado sin efecto la traslación de don Francisco Lozano Muñoz, vicecónsul de España en Larache, a nuestro vice-consulado en Saint-Nazaire.

—D. Camilo Bonetti ha sido declarado cesante del cargo de recaudador en Saffi, y en su lugar se ha nombrado al cesante de igual cargo D. Manuel Sorrentini.

—Se han dejado sin efecto los nombramientos de D. Rafael Busabire, vicecónsul de España en Larache, D. Eduardo Fernández Reinoso, vicecónsul en Rabat, y D. Antonio Píero y Cruz, id. en Saffi.

Damos cabida al proyecto de ley de reemplazo del ejército leído ayer tarde en las Cortes, aun retirando otros originales, por el interés que ofrece.

«Artículo 1.º El ejército se dividirá en permanente y de reserva.

Art. 2.º El ejército permanente se dividirá en activo, y en primera reserva ó reserva activa.

Art. 3.º El número de hombres que deba estar sobre las armas, se fijará anualmente por las Cortes.

Art. 4.º Constituirán la primera reserva todos los soldados que hayan cumplido cuatro años de servicio en el ejército activo, y su situación será la de licencia ilimitada en sus hogares, sin goce de haber alguno.

Art. 5.º La segunda reserva se constituirá con los jóvenes de 20 años que escadan del contingente anual que señalan las Cortes para cubrir las bajas del ejército permanente, y permanecerán en sus casas, según se espresa, para la primera reserva.

Art. 6.º El servicio militar es obligatorio para todos los españoles al cumplir 20 años de edad.

Art. 7.º De los jóvenes que anualmente deben ingresar en el ejército en virtud de la obligación que impone el artículo anterior, se destinarán por la suerte al ejército permanente el número de hombres que fijen las Cortes.

Los jóvenes que no tengan ingreso en el ejército permanente y que estén comprendidos en las excepciones que establece esta ley, serán destinados a la segunda reserva.

Para los efectos de la distribución por la suerte que se espresa, se entenderá que los números más bajos, desde el uno hasta el que se haya fijado proporcionalmente en cada distrito municipal para cubrir el contingente señalado por las Cortes, son los que deben ingresar en el ejército permanente; los números más altos hasta el total de jóvenes alistados, serán destinados a la segunda reserva.

Art. 8.º La duración del servicio militar para los jóvenes que ingresen en el ejército permanente, será de cuatro años sobre las armas y dos en la primera reserva. Los que pasen a formar la segunda reserva, permanecerán en ella el plazo de un año.

Art. 9.º El tiempo de servicio a que se refiere el artículo anterior, empezará a contarse desde el día 1.º de Julio del año en que se verifique el llamamiento.

Art. 10. Quedan subsistentes todas las excepciones comprendidas en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de quintas de 20 de Enero de 1856 con las modificaciones de la de 1.º de Marzo de 1862.

Art. 11. La sustitución en el servicio militar antes de ingresar en el ejército y el cambio de situación ó número, queda autorizado con sujeción a lo que determinen las disposiciones vigentes.

Art. 12. Queda abolida la redención a metálico.

Art. 13. Quedan suprimidos para lo sucesivo los premios de enganche, pluses, sobresueldo y demás remuneraciones pecuniarias que conceden a los que sirven voluntariamente en el ejército, las leyes de 24 de Junio de 1867 y 1.º de Marzo de 1868.

Art. 14. Queda abolida la indemnización de que trata el art. 122 de la ley de quintas de 1856.

Art. 15. El derecho a servir voluntariamente

en el ejército se conserva a todos los españoles que reúnan los requisitos y circunstancias que actualmente se exigen por las leyes, órdenes y reglamentos.

Art. 16. La duración del compromiso voluntario será por lo menos de cuatro años. En ningún caso los que sirvan voluntariamente podrán pasar a las reservas sin su consentimiento.

Art. 17. Los soldados que sirvan en el ejército podrán igualmente continuar en el servicio si lo desearan, comprometiéndose por dos años al menos y no pudiendo exceder de cuatro el tiempo máximo a que se obliguen en cada compromiso.

Art. 18. Después de cumplidos cuatro años en servicio activo con exclusión del tiempo servido en las reservas, los soldados adquieren derecho a los premios de constancia que se establecen, que serán los siguientes:

Desde 4 a 8 años de servicio...	10 rs.
De 8 a 12	15
De 12 a 16	20
De 16 a 20	25
De 20 en adelante	30

Estos premios los recibirá el soldado en mano, sin que pueda disponerse de ellos para atender a su vestuario, rancho ni pago de otra obligación, a menos que no conviniere en hacerlo el interesado.

Art. 19. Los individuos de la segunda reserva gozarán de todos sus derechos de ciudadanos; podrán contraer matrimonio sin autorización, cambiar de domicilio ó de residencia y viajar por España y el extranjero, dando conocimiento precisamente al jefe de la reserva respectiva.

Art. 20. La segunda reserva no podrá ni en todo ni en parte ponerse sobre las armas sino en virtud de una ley, y se fijará en la misma el tiempo de servicio en caso de guerra.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 21. Una ley de retiros determinará las pensiones que deberán disfrutarse al retirarse del servicio las clases de tropa que continúan voluntariamente en compensación de las ventajas pecuniarias hasta aquí establecidas por las leyes.

Art. 22. Un reglamento determinará las causas de exención para el servicio, así en el ejército activo como en la reserva.

Art. 23. Los individuos que sirven actualmente en el ejército permanente, y que por cumplir cuatro años de servicio deban pasar a la segunda reserva a extinguir los cuatro años que les faltan de servicio según la ley vigente, pasarán a la primera reserva que se establece en el artículo 4.º, en la cual deberán cumplir dos años para el total de los seis a que por esta ley están obligados todos los soldados.

Los individuos de la segunda reserva que hubiesen cumplido seis años de servicio entre activo y segunda reserva recibirán desde luego sus licencias absolutas.

Art. 24. La ley de quintas de 20 de Enero de 1856 y la de reenganches de 29 de Noviembre de 1859, reformada por otras de 26 de Enero de 1864 y 24 de Junio de 1867, quedan modificadas ó derogadas en armonía con lo que determina la presente.

Art. 25. Por los ministerios de la Guerra y Gobernación se dictarán las órdenes y reglamentos oportunos para la ejecución de esta ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Con el fin de ensayar un nuevo medio de cubrir las bajas del ejército activo, y sin embargo de lo que se determina en esta ley, se autoriza al ministro de la Guerra para organizar dos batallones, compuestos exclusivamente de voluntarios, bajo las bases siguientes:

1.º Los voluntarios se obligarán a servir en el ejército activo por un plazo de 8 años.

2.º El costo íntegro para el Estado de las clases de tropa de estos batallones, será el siguiente:

Soldado	6
Cabo segundo	6'25
Idem primero	6'50
Sargento segundo	7'50
Idem primero	9

3.º El haber líquido que disfrutaran dichas clases descontando lo que corresponde por vestuario, utensilio, hospitalidad, pan, etc., será el que a continuación se espresa:

Soldado	4'50 rs.
Cabo segundo	4'75
Idem primero	5
Sargento segundo	6
Idem primero	7'50

4.º Cada batallón constará de ocho compañías a 100 hombres cada una.

5.º El cuadro de jefes y oficiales se nombrará por el ministerio de la Guerra sacándolo del de los tercetos batallones de los regimientos de infantería, con el fin de no aumentar los gastos

consignados en el presupuesto.

6.º Las clases de sargento primero a cabo primero se sacarán de los regimientos de infantería y comisiones de reserva. Los cabos segundos serán nombrados entre los voluntarios que reúnan las condiciones que para este empleo se requieran.

7.º La fuerza de los dos batallones que se organicen, se deducirá del total asignado al arma de infantería, para que no exceda de los 80,000 hombres votados por las Cortes el total de la fuerza del ejército.

8.º El gasto que ocasionen los dos batallones que se organicen por consecuencia de los mayores haberes que se asignan a las clases de tropa, se cargará al capítulo 7.º del presupuesto de la Guerra, debiendo concederse al ministro del ramo oportunamente el suplemento de crédito necesario para cubrir el déficit que haya resultado.

9.º El ministro de la Guerra dará en su día cuenta a las Cortes del resultado que haya obtenido, a consecuencia de la autorización que se le concede.—Madrid, 8 de Febrero de 1870.—Juan Prim.

Nuestros amigos de Teruel han formado una junta carlista y publicado un periódico titulado *La Solución*, que defenderá nuestras doctrinas.

También en Zaragoza, desde el 15 del actual, verá la luz pública otro periódico carlista titulado *La Concordia*.

Desearnos a los nuevos campeones de la buena causa larga y próspera vida.

Segun escriben a *La Esperanza*, la juventud carlista de Murcia obsequio el día 7 del corriente al valiente joven el cadete D. José Bartet, preso en las alturas de Uriel en Agosto último por defender los derechos de D. Carlos de Borbon. Dicho obsequio consistió en un magnífico ramillete, acompañado de un soneto y una elegante tarjeta, que contenía los nombres de los individuos de la comisión encargada de presentar dicho obsequio. Este hecho revela las nobles ideas de la juventud murciana.

Nos escriben de Pozuelo de Plasencia pintándonos con los más negros colores, la situación de aquel país. Allí se cortan árboles, parras y olivos; allí, como en todas partes, la seguridad individual es una palabra vana. El 29 del pasado fué asesinado bárbaramente el alcalde del pueblo de Valdeobispo, D. Diego Parada, al regreso de Plasencia y en presencia de sus trabajadores. ¿Es posible vivir así en este desdichado país?

Hemos leído el prospecto de una notable revista mensual, que con el título de *La Lámpara del Santuario* verá en breve la luz; publicación que se recomienda por sí misma, como dedicada exclusivamente a propagar la frecuencia de la comunión. Dicha revista será órgano de la Asociación del Culto continuo del Santísimo Sacramento, por cuya razón le deseamos la más próspera acogida.

CORTES CONSTITUYENTES.

Extracto de la sesión celebrada el día 10 de Febrero de 1870.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR RUIZ ZORRILLA.

Abierta la sesión a las dos y media, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se leyó el dictamen de la comisión de actas relativo al de Játiva, proponiendo la admisión de diputado del Sr. Pascual y Genis.

El Sr. VINADER. (Mañana publicaremos su discurso, tomándole del *Diario de las Sesiones*).

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS subió a la tribuna y leyó el proyecto de ley de reemplazo del ejército.

El señor marqués de SARDOAL pidió que el proyecto de reemplazo pasara a la comisión nombrada ya para entender de una proposición de ley referente a organización del ejército.

El señor presidente del CONSEJO manifestó que el Gobierno no tenía inconveniente alguno en que el proyecto pasara a la comisión de que era secretario el Sr. Sar道al, pero rogaba a la citada comisión que activase sus trabajos, porque las primeras operaciones de la quinta debían ser en el mes de Marzo.

El Congreso acordó que pasara el proyecto a la citada comisión.

El Sr. CORONEL y ORTIZ defendió el dictamen de la comisión, diciendo que el acta de Játiva no tenía protesta alguna.

El Sr. MUZQUIZ dijo que ellos no habían pensado traer el nombre de Cabrera a los tribunales y que si no hubiera sido por los atropellos

que se han cometido, de seguro hubiera triunfado. Si en las actas no hay protestas graves, era por la inexperience de los carlistas en las elecciones.

El señor ministro de la GOBERNACION dijo que la Constitución concedía el derecho de asociación a todos los españoles, y los carlistas debían ejercerlo como los que no lo eran.

El Sr. ROJO ARIAS, como individuo de la comisión, dijo que el acta no había sido combatida por el Sr. Muzquiz ni podía serlo, porque era perfectamente legal.

El Sr. BUGALLAL usó de la palabra en tercer turno, diciendo que la revolución y ciertas predicaciones que se habían hecho en la Asamblea misma, en sentido exagerado, habían resultado del partido carlista, pues muchos conservadores de todas procedencias se habían hecho carlistas por buscar reposo y orden contra la anarquía revolucionaria.

Estuvo conforme con el Sr. Rivero en que los que sufrían perjuicio ó atropello en sus derechos debían acudir a los tribunales.

Dijo las influencias que en su favor tuvo el candidato ministerial, y los medios empleados para que triunfase.

Reseñó las ilegalidades cometidas antes de la elección, y en la elección.

Y terminó lamentándose de que actas como las de Játiva dieran un ejemplo de lo que era el sufragio universal.

El Sr. PASCUAL Y GENIS, diputado electo por Játiva, defendió el acta, sosteniendo la legalidad de la elección y las ventajas del sufragio universal, sin las cuales no habrían podido los carlistas llevar a las urnas los votos, que gracias al Clero y a la ayuda de los moderados, lograron obtener.

El Sr. RUIZ CAPDEPONT habló para alusiones personales, esponiendo algunos hechos electorales para demostrar que había existido coacción en algunos pueblos para proteger la elección del Sr. Genis.

Rectificaron los oradores y quedó aprobado el dictamen y admitido como diputado el Sr. Genis. También quedó admitido el Sr. Cervera.

Y se levantó la sesión.

Eran las seis y cuarto.

NOTICIAS GENERALES.

Recomendamos a las familias católicas el colegio del Santo Corazón de Jesús, establecido en la calle de las Torres.

En él encontrarán satisfechos los padres de familia toda justa exigencia respecto a la educación en sus múltiples aspectos. La religiosa, la más importante de todas, está garantida por el celo del sacerdote director del establecimiento y por el probado catolicismo de sus profesores, que los ilustran al mismo tiempo con la verdadera ciencia.

Nada tampoco deja que desear el local respecto a las condiciones higiénicas y de recreo. Los dormitorios son espaciosos y ventilados salones, donde a la par de la comodidad, reina el más esmerado aseo; las clases son numerosas y capaces; hay un magnífico gimnasio, baño y un grande y hermoso jardín.

PARTE RELIGIOSA.

SANTOS DE HOY. San Saturnino, Presbítero, y compañeros mártires, fundadores de los Siervos de María.

SANTOS DE MAÑANA. Santa Eulalia, virgen y mártir, y la primera traslación de San Eugenio.

CULTOS.

Se gana el jubileo de Cuarenta horas en la iglesia de siervos de María, plaza de San Nicolás, donde por la mañana habrá misa mayor, y por la tarde preces y procesión de reserva.

Por la noche habrá ejercicios en Italianos, San Ignacio, Monserrat y oratorios.

VISITA DE LA CORTE DE MARÍA. Nuestra Señora del Pilar en Monserrat ó en San Andrés.

Se reza de la primera traslación de San Eugenio, Arzobispo de Toledo, con rito doble y color encarnado.

Imprenta de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL, Pelayo, 34.

a cargo de R. Labajos y Arenas.

SECCION DE ANUNCIOS.

PASTA DE CARACOL.

Está generalmente reconocido que este remedio es el más eficaz para curar radicalmente y con la mayor prontitud las pesadas enfermedades que atacan al pecho, tales como la tos, los catarrros, espasmos de sangre, irritaciones, constipaciones, etc. A su incontestable cualidades reúne la de tener un sabor agradable que hace gustoso su uso. Véndese a 2 francos la caja, y para asegurarse de la pureza y legitimidad de este producto, *catábase el sello de la farmacia QUEBQUET*, inventor ROCHER, sucesor, rue de Poitou, 11, París. La Agencia franco-española, calle del Sordo, 31, en Madrid, reparte los pedidos; en provincias sus depositarios. Por menor a 10 rs. caja, señores Borrell hermanos, Puerta del Sol, 5, 7 y 9; don José Simon, Caballero de Gracia, 1; Moreno Miquel, Arenal, 4 y 6; Escobar, plaza del Arenal, 7, y Sanchez Ocaña, Príncipe, 13.

EL ECO DE ROMA

ha publicado su primer número el día 1.º de Febrero, y en adelante saldrá a luz todos los jueves, en 16 páginas del tamaño de pliego marca española.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En Roma, Estados Pontificios y demás Estados de Italia, 8 liras el semestre, y 4 50 c. el trimestre.

En España, por libranzas francas de porte ó cualquier otro medio directo, 24 reales el trimestre y 46 el semestre.

En Francia y demás Estados europeos, 6 francos el trimestre y 11 el semestre.

En Ultramar, por remesas directas, francas de porte, 12 francos el trimestre y 20 el semestre; por conducto de comisionados, 15 francos el trimestre y 25 el semestre.

PUNTOS DE SUSCRIPCION.

Roma.—Administración de *El Eco de Roma*, piazza de Crociferi, núm. 48.

España.—En Madrid: librerías de Tejado, de Olamendi, de Lopez y de Aguado.

En provincias, en las principales librerías y correspondientes de los periódicos católicos.

LA CIUDAD DE DIOS, REVISTA CATÓLICA dirigida por D. F. Asís Aguilar, Presbítero, y J. M. Orti y Lara. Se publicará el día 10 y 25 de cada mes, empezando en el próximo mes de Enero. Cada número contendrá al menos 80 páginas en 4.º con cubierta de color. Suscribirse en la administración, calle de la Estrella, 11, principal, y en las principales librerías, al precio de 20 rs. trimestre.

(G.—3.—v.)

ESTUDIOS ESPECIALES SOBRE LA Erisia pulmonal, por D. Francisco Sastre y Domínguez.

Librería de San Martín, Puerta del Sol, y de Bailly-Baillière, plaza de Topete; y en casa del autor, calle de Segovia, 10, segundo, a 10 rs. (Núm. 716.—1.)

CREO EN DIOS CON LA SANTA IGLESIA católica romana. Carta del Padre Francisco Mestres, presbítero, a D. Francisco Suñer y Capdevila.

Véndese en la librería de Subirana, al precio de 4 rs. en Barcelona y 4 1/2 en los demás puntos.

La primera Carta al mismo, a tres cuartos.

Una palabra al autor de la baladronada, *Guerra a Dios*, a un cuarto.

Depósito en la librería de D. Miguel Olamendi, calle de la Paz, núm. 6, en Madrid.

J. OSES (fotógrafo).

Calle Mayor, 18 y 20.—Seis tarjetas, 24 rs.; seis americanas, 40. (713.—15.)

PLUS DE CHEVEUX BLANCS. NO MAS CABELLOS BLANCOS.

PERFECCIONADO, 44 y 50 rs. Este producto sublime vuelve para siempre los cabellos blancos y a la barba su color primitivo sin ninguna preparación ni lavaduras.—Progreso, inmenso éxito garantido. Ent. Salles.—Perfumista químico, 5, rue de Buci, París.—Madrid, Agencia franco-española, 51, calle del Sordo, sirve los pedidos.—Al por menor. Moreno Miquel, Sanchez Ocaña, Borrell y Escobar.

LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA,

PERIODICO

EXCLUSIVO PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS.

Los modas más recientes representadas por los figurines iluminados mejores que se conocen, las explicaciones más detalladas que se pueden desear, la moralizadora lectura de sus novelas y artículos hacen que esta publicación no tenga rival ni aún en el extranjero.

CADA AÑO REPORTE

2,000 a 2,500 dibujos de bordados, labores y adornos de cuantas clases inventa el buen gusto.—24 grandes patrones para cortes de vestido, tamaño natural.—Varías tapicerías en colores, punto Berlin.—Algunas piezas de música.—100 figurines en negro y 48 ó más sobre acero, iluminados.—1,200 ó más columnas de lectura, tamaño gran folio, impresas sobre papel vitela, que contienen cuantas explicaciones puedan desearse sobre las labores y adornos, y sobre 60 tomos de novelas preciosas, instructivas y morales.

REGALO.

Las señoras que se abonen a la edición de lujo, reciben gratis el gran *Almanaque Enciclopédico español ilustrado*, que la empresa publica exclusivamente con este objeto.

Para más detalles se da el prospecto gratis en su administración de Madrid, calle de Bailen, núm. 4, y librería de D. Bailly-Baillière, plaza de Topete, núm. 8.

También se remite a provincias a quien lo solicite.

PRONUNCIADAS EN LA CATEDRAL DE PARÍS POR EL R. PADRE FÉLIX.

1869

Materias de que tratan.—Conferencia I: La existencia de la Iglesia.—II: La Iglesia rechazada, la Iglesia necesaria.—III: De la vitalidad de la Iglesia.—IV: De la santidad de la Iglesia.—V: Del catolicismo de la Iglesia.—VI y última: De la unidad de la Iglesia católica.

Estas Conferencias de 1869 forman un folleto de 168 páginas, y se venden a 4 reales en Madrid y 5 en provincias en la administración de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL, Pelayo, 38 y 40.